

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Programa Andino de Derechos Humanos

Maestría en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica

Mención en Litigio Estructural

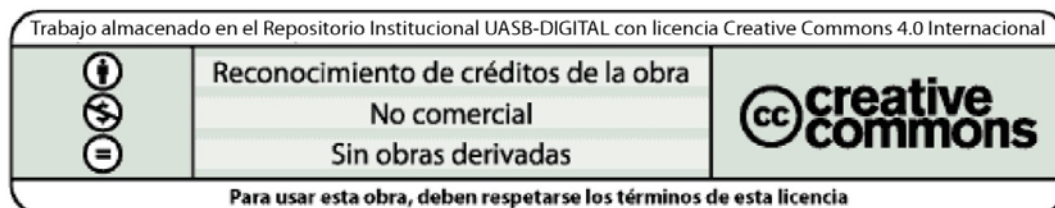
Límites del procedimiento abreviado como garantía del derecho humano a la presunción de inocencia a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador

Caso Mejía

Diana Elizabeth Segarra Balseca

Tutora: Gina Morela Benavides Llerena

Quito, 2019



Cláusula de cesión de derecho de publicación de tesis

Yo, Diana Elizabeth Segarra Balseca autora de la tesis intitulada Límites del procedimiento abreviado como garantía del derecho humano a la presunción de inocencia a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magister en Derechos Humanos, con mención en Litigio Estructural en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico

Fecha:

Firma:

Resumen

El presente trabajo de investigación, tiene como objeto de estudio al procedimiento abreviado como garantía del derecho humano a la presunción de inocencia a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, tomando en consideración que si bien dicho procedimiento ya venía aplicándose a través del derogado Código de Procedimiento Penal, se esperaba que la normativa legal vigente tutele de mejor manera el derecho aludido, sin embargo, ha sucedido lo contrario cuando la norma penal vigente aún exige para la aplicación del procedimiento abreviado que el procesado se inculpe y deja de lado cualquier posibilidad de que se ratifique su estado de inocencia en la tramitación de dicho procedimiento conforme lo manda la Constitución de la República, lo que da muestra de la necesidad de reforma de un cuerpo legal que como obra humana se muestra perfectible.

Para lograr el objetivo de reforma se considera aplicable el diseño y desarrollo de un plan de incidencia estratégica que tenga como referente el caso del Colegio Mejía donde alumnos de dicha institución educativa fueron privados de su libertad y conminados a aceptar la aplicación de un procedimiento que bajo la normativa legal requiere de la admisión del hecho que se imputa, vulnerándose de esta forma el derecho a la presunción de inocencia bajo el pretexto de la aplicación de una pena mínima.

La investigación aborda un marco conceptual y de protección que trata sobre el procedimiento abreviado, la presunción de inocencia y los principios que los sustentan, luego se hace un estudio del procedimiento abreviado en el Ecuador y el Derecho comparado, tomando como referencia el caso de los alumnos del Colegio Mejía, para finalmente plantear una reforma normativa al COIP apoyada dicha propuesta en un proceso de incidencia estratégica desde las dimensiones jurídica, social y política que viabilice dicha propuesta.

A mis padres porque con su presencia, ayuda, apoyo y comprensión han sido en todo momento los principales pilares de mis éxitos.

A quienes sin escatimar esfuerzo alguno han dedicado gran parte de su vida para educarme y convertirme en una persona de provecho.

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Introducción	11
Capítulo Primero	13
Marco conceptual y de protección del procedimiento abreviado.....	13
1.1 Origen del procedimiento abreviado.....	13
1.2 Plea bargaining	16
1.3 Principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado	18
a. Principio de igualdad ante la ley	25
b. Principio de contradicción	26
c. Principio de inmediación	28
d. Principio de no autoincriminación.....	29
e. El principio de inocencia	30
Capítulo Segundo.....	35
Prácticas del procedimiento abreviado.....	35
2.1. El procedimiento abreviado en el proceso penal de Ecuador.....	38
2.3. Análisis del caso “Mejía”	45
Capítulo tercero.....	61
Propuesta de reforma normativa al COIP sobre Procedimiento Abreviado	61
3.1. Propuesta de reforma al COIP.....	61
3.2 Incidencia estratégica para viabilizar el proyecto.....	67
3.2.1. Ubicación de contexto	67
Conclusiones y Recomendaciones.....	87
Conclusiones	87
Recomendaciones	91
Bibliografía	93

Introducción

La presente investigación da respuesta a la pregunta central ¿Cuáles son los mecanismos de incidencia estratégica que se podrían aplicar en el caso “Mejía” como una herramienta para viabilizar reformas legales que precautelen el derecho humano de la presunción de inocencia en la aplicación del procedimiento abreviado a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador?

Para dar respuesta a esta pregunta se realizó un análisis del expediente judicial de los 60 jóvenes que fueron apresados en los alrededores del Colegio Mejía, el mencionado análisis incorporó el enfoque de derechos humanos haciendo énfasis en los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación. Adicionalmente se compiló información de fuentes secundarias de investigación referentes al procedimiento abreviado y sus efectos una vez que los procesados admiten el hecho que se les atribuye. Se acopió información sobre legislación nacional e internacional relacionada al tema, para ubicar el estándar del derecho humano a la presunción de inocencia.

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho humano, que se encuentra consagrado en la Constitución de la República y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otra parte la Constitución de la República, contempla las garantías básicas que se observarán en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, determina que el derecho a la defensa de toda persona incluye que nadie pueda ser “forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”, sin embargo dentro del procedimiento abreviado, en muchos casos los procesados que se encuentran privados de su libertad se ven forzados a admitir el hecho que se les atribuye ante la amenaza de la aplicación de una pena mayor, circunstancias que en la vida real se da solapadamente bajo un manto de aparente legitimidad.

La garantías necesarias para la defensa, no se aplican en su totalidad dentro de la tramitación del procedimiento abreviado, tal cual se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal, sin bien se lo mira como una herramienta jurídica útil para descongestionar el trabajo de las judicaturas, considerándolo un procedimiento especial, el mismo que evita la sustentación de la etapa de juicio, requiere como ya se dijo para su aplicación, que la persona procesada admita el hecho que se le atribuye y

consienta en la aplicación de dicho procedimiento que cabe únicamente en delitos sancionados con una pena máxima de 10 años, de esta forma en relación a la derogada norma adjetiva penal se amplía el universo de delitos cuyo juzgamiento se puede someter a un procedimiento abreviado, hecho que tiene defensores y detractores.

En el presente trabajo, se analiza y establece la aplicación del Procedimiento Abreviado en el caso de los estudiantes del Colegio Mejía; se inicia con el Capítulo I en el que se presenta un marco conceptual y de protección del procedimiento abreviado, en donde se estudia el origen de este procedimiento así como los principios que lo sustentan. Además se muestran los principios procesales que se vulnerarían con la aplicación del Procedimiento Abreviado.

El Capítulo II se analiza como aparece el proceso abreviado dentro del sistema de administración de justicia penal ecuatoriano, muestra los referentes que dan al nuevo modelo de administrar justicia; muestra además las adaptaciones que han procurado darle mayor connotación e instituirlo en un verdadero instrumento alternativo de administración de justicia penal, es así que como principio la normativa penal determinaba que son susceptibles de aplicación en aquellos delitos sancionados con hasta cinco años de pena privativa de libertad. También se analiza el caso de los estudiantes del colegio Mejía en donde se vulneran derechos humanos de los estudiantes, los mismos que se acogen al procedimiento abreviado.

El Capítulo III formula una propuesta de reforma normativa al procedimiento abreviado previsto en el COIP, como mecanismo para precautelar el derecho al debido proceso y en particular el derecho humano a la presunción de inocencia. Para viabilizar la propuesta se desarrolla un proceso de incidencia estratégica desde tres dimensiones: jurídica, social y política.

Capítulo Primero

Marco conceptual y de protección del procedimiento abreviado

El presente capítulo tiene como objeto de estudio desarrollar un marco teórico que sustente al procedimiento abreviado como garantía del derecho humano a la presunción de inocencia; para lo cual, se analizan los orígenes del procedimiento abreviado, así como la conceptualización de términos como *plea bargaining*. Además se desarrolla el derecho humano a la presunción de inocencia, los principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado, así como los principios procesales que pueden ser vulnerados con una aplicación inadecuada del procedimiento abreviado.

1.1 Origen del procedimiento abreviado

Los elementos y características del procedimiento abreviado son de reciente creación teniendo como antecedente más próximo el derecho anglosajón e instituciones jurídicas como el *plea guilty* –declaración de culpabilidad– o el *plea bargaining* –súplica negociada–, lo cierto es que desde el origen puede ser remontado aún a la época del derecho germánico donde en materia penal, las partes en conflicto podían negociar una pena o mejor dicho una reparación económica o personal.

Es en la época del Derecho Romano en donde para Mommsen¹ la Ley de las Doce Tablas dentro del régimen punitivo distingue formalmente una especie de procedimiento especial denominado “composición”, sujeto al acuerdo o arreglo entre las partes y la sustitución de la pena por un pago o indemnización, encaminado a limitar la ejecución de la venganza personal, como “abreviar” el procedimiento ordinario sancionatorio, en los casos intrascendentes de infracción penal o en aquellos delitos en que no se podía aplicar la Ley del Tali3n, sin embargo dichos orígenes se alejan de la concepción actual del procedimiento abreviado cuya esencia no se establece 3nicamente de la denominaci3n.

El procedimiento abreviado nace como un procedimiento especial frente al ordinario y en la negociaci3n de la pena, permitiendo el Derecho en un primer momento que dicha negociaci3n se de en forma directa entre el sujeto activo y pasivo

¹Theodor Mommsen, *Derecho penal romano* (Bogot3: Temis, 1976), 42

del delito, para más tarde ser el Estado a través del órgano competente quien solemnice dicho acuerdo o arreglo que comprendía básicamente el resarcimiento del daño a través de una retribución económica o personal, como resulta lógico, dicho resarcimiento cabe siempre para determinado tipo de delitos menos graves pues los más graves, no pudiendo ser objeto de negociación que lleve a un acuerdo o arreglo económico o personal están sujetos al procedimiento penal ordinario, dada la impresión que causan en el colectivo social.

Para autores como John Langbein otro antecedente relevante sería el derecho medieval europeo sobre la tortura, haciendo una comparación de semejanzas con la práctica del *plea bargaining* dicho autor sostiene que los “juristas europeos concibieron lo que los abogados estadounidenses llamarían hoy un estándar de causa probable (*probable cause*), diseñado para asegurar que sólo las personas con altas probabilidades de resultar culpables fueran interrogadas bajo tortura.”².

La influencia de la Iglesia Católica y la inquisición concibe un sistema de justicia penal basado en lo que se llamaría la ley de la tortura que permitía en base al tormento obtener la confesión del procesado, considerada la mayor de las pruebas, ésta dispensa al juez sobre la investigación de los hechos a fin de lograr una rápida sentencia, abreviando el procedimiento a costa de los derechos del procesado que le asisten como ser humano aun cuando en aquella época mal se podría establecer tal concepción jurídica.

Es dentro del sistema jurídico anglosajón de ascendencia germánico-romana, donde el procedimiento abreviado tiene el origen más inmediato a través del *plea guilty* –declaración de culpabilidad– y el *plea bargaining* –súplica negociada–, figuras establecidas a modo de procedimientos especiales destinados a “abreviar” el juicio a través de la autoinculpación directa o indirecta del procesado, contrariando de esta manera el principio de presunción de inocencia puesto al servicio de la agilidad y descongestión procesal; en el modelo inglés con la formulación de cargos en audiencia, bajo el auspicio de un abogado, el procesado puede inculparse declarándolo así, esto trunca el proceso para que se dicte sentencia. En el modelo americano “ante los hechos probados” se establece un acuerdo entre la fiscalía y el procesado a cambio de una pena más benigna de la que procedería de instaurarse un juicio por jurados,

²John H. Langbein, “Tortura y plea bargaining” en Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps) *El procedimiento abreviado* (Argentina: Editores del Puerto, 2001), 6

contrariándose así principios como el de oralidad, publicidad, contradicción, intermediación y la presunción de inocencia.

Para Maier y Bovino citados por Campaña el procedimiento abreviado se basa “en la supresión del debate y de la defensa, esto quiere decir del derecho de ser escuchado y defendido, de saber controlar y hacer un buen uso de la prueba y así como también discutir sobre el resultado del procedimiento en sí, todo esto gira alrededor de una economía funcional por las infracciones más leves, más que por la necesidad rápida de una sanción”³

En el campo del derecho comparado el procedimiento abreviado se encuentra establecido hace un par de décadas en varios países de América del Sur como Argentina que lo aplicó en el año 1987 y Ecuador se lo regula por primera vez en el Código de Procedimiento Penal del año 2000 (L s/n. RO-S 360: 13-ene-2000), a estos dos países se suman entre otros como Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, en cada uno de los cuales se lo aplica con sus notas características pero con un fundamento común, innovación que surge como respuesta a las acuciantes necesidades de los saturados sistemas de administración de justicia penal en el continente, siendo los objetivos primordiales de implementación de este tipo de procedimiento especial, la simplificación del procedimiento penal ordinario estableciéndose una alternativa al mismo para el descongestionamiento de trabajo de las judicaturas y el ahorro de recursos, que se logra lastimosamente evitando controvertir los elementos de prueba existentes, violentando el derecho a la defensa y a la no autoincriminación.

Para autores como Narváez este tipo de procedimientos son asequibles cuando “la prueba disponible hace casi segura la condena del imputado”⁴, prueba que como ya se indicó no se puede rebatir, más aún sirve de sustento para la autoinculpación del procesado sin que se pueda producir otra adicional, de esta forma el procedimiento abreviado se instituye a modo de justicia negociada dirigida por la fiscalía a la que debe sujetarse el procesado frente a la amenaza de un castigo mayor.

Para Jorge Zavala citado por Campaña el procedimiento abreviado es “un recurso inquisitivo para imponer la voluntad del todopoderoso fiscal frente al débil justiciable que debe aceptar al procedimiento abreviado en un afán de obtener el

³ Julio Maier y Alberto Bovino, *El Procedimiento Abreviado* (Buenos Aires, 2004), citados en Johana Estefanía Campaña Jarrín, “Incidencia jurídico penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana” (Tesis previa a la obtención del título de abogado, Universidad Central del Ecuador, 2014), 10, <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>.

⁴ Marcelo Narváez, *Procedimiento penal abreviado* (Quito: Librería Jurídica Cevallos, 2003), 51

cambio de una acusación mayor por una menor, y en consecuencia recibir el ‘beneficio’ de una pena atenuada”⁵

Ferrajoli refiriéndose a los pactos sobre la pena y sobre el procedimiento, señala que el sistema de garantías se altera pues la proporcionalidad del delito y pena pasa a depender de la habilidad negociadora de la defensa; se atenta en contra de los principios de igualdad, certeza y legalidad penal pues no se refiere a ningún criterio legal que defina la severidad o indulgencia del juez. También se transgrede la obligatoriedad del proceso penal cuando se libera al culpable cuando declara su culpabilidad; se va en contra de la presunción de inocencia, la naturaleza del interrogatorio; no hay una relación de fuerza pues el investigador no tiene que probar el delito sino que más bien presiona al investigado para que acepte su culpabilidad.⁶

1.2 Plea bargaining

Se habla de plea bargaining cuando el fiscal ofrece una reducción a la sanción penal siempre que el acusado declare su culpabilidad. Para Langbein: Existe plea bargaining cuando un fiscal induce a una persona acusada penalmente a confesar su culpabilidad, y a renunciar a su derecho a un juicio, a cambio de una sanción penal más benigna de la que le sería impuesta si se declara culpable luego de un juicio.⁷

La benignidad de la pena que el fiscal ofrece puede ser directamente a través de la reducción de los cargos atribuidos al acusado; además puede ser indirectamente, cuando el juez a través de una sugerencia le impone una pena menor. De este procedimiento se logra que el fiscal no requiera probar la culpabilidad del imputado, y el tribunal es dispensado de establecerla. El tribunal condena al acusado con su declaración de culpabilidad o confesión.⁸

En los Estados Unidos de Norte América el procedimiento penal ordinario es el juicio por jurados consagrado constitucionalmente a través de la sexta enmienda que dice “En toda persecución penal, el acusado tendrá derecho a [...] juicio [...] por un

⁵Jorge Zavala Baquerizo, citado en Johana Estefanía Campaña Jarrín, “Incidencia jurídico penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana” (Tesis previa a la obtención del título de abogado, Universidad Central del Ecuador, 2014), 10, <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>

⁶Luigi Ferrajoli, *Derecho y razón: Teoría del garantismo penal* (Madrid - España: Editorial Trotta, 1995), 749

⁷Langbein, “Tortura y plea bargaining”, 9.

⁸Ibíd. 7

jurado imparcial”⁹, sin embargo en Estados Unidos de Norte América como en cualquier otro sistema de administración de justicia, el estado de las cosas cambian, es así que el juicio de jurados instituido como un procedimiento sumario se transformó en doscientos años en un procedimiento tortuoso “impracticable como procedimiento de rutina para la disposición de casos penales”¹⁰ que requería el desarrollo de un procedimiento alternativo que mitigará los acuciantes problemas en que se debatía el sistema de juicio vigente estadounidense, pues los requerimientos del siglo XVIII, no eran los mismos del siglo XX, para esta gran nación.

Durante doscientos años de uso del sistema de juicio por jurados en los Estados Unidos de Norte América se desarrollaron como era de esperarse un conjunto de garantías y mecanismos de protección a favor del procesado, esto tuvo como efecto que el juicio de jurados concebido como un procedimiento sumario, no lo sea más, frente a esta realidad la solución no puede ser derogar aquellas garantías y mecanismos establecidos a favor del procesado, sino buscar un procedimiento alternativo al juicio de jurados que permita librar los “inconvenientes”, entendiéndose que la única forma de lograr aquello es la de inducir al procesado, a que admita culpabilidad brindando la propia confesión “voluntaria” a cambio de un “arreglo” o pena más benigna que la que merecería de darse un juicio por jurados, alternativa coercitiva que surte efecto frente a la amenaza de un mal mayor y deja al procesado en un estado de indefensión, desvaneciéndose el principio de presunción de inocencia, al renunciar a la garantía de juicio previo constitucionalmente consagrada en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

Maier y Bovino sostienen que esta figura de origen anglosajón “exige al Tribunal que decida si los hechos probados sustentan una inferencia de culpabilidad más allá de una duda razonable”¹¹, concepto que supuestamente opera a favor del reo, sin embargo los “hechos probados” por ser admitidos por el procesado y que sustentan la culpabilidad de este, están sujetos a ser apreciados por el juzgador sin miramientos, lejos de cualquier otra convicción aun cuando el procesado sea inocente.

⁹ Estados Unidos, *Constitución de los Estados Unidos de América*, Enmienda VI

¹⁰ Langbein, “Tortura y plea bargaining”, 13

¹¹ Maier y Bovino, *El Procedimiento Abreviado*, 19.

1.3 Principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado

Mucho se ha discutido sobre los principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado, mismos que no se apartan del contexto de origen a través del cual se ha desarrollado y al cual se ha hecho referencia anteriormente.

Al momento de incorporarse cualquier figura o institución jurídica dentro de la legislación interna de un Estado se han de observar los principios que la rigen, en base a los cuales ha de aplicarse. La inobservancia de estos principios puede provocar la desnaturalización.

Los principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado se instituyen en directrices, las mismas que guían la forma en que se aplica dicho procedimiento, los requerimientos, las características, etc.

Dentro de los principios procesales que sustentan el procedimiento abreviado, destacan:

- El principio a una justicia pronta y eficaz
- El principio de acceso a la justicia
- El principio de legalidad
- El principio de simplificación
- El principio de celeridad procesal
- El principio de economía procesal
- El principio el de oportunidad

A continuación se detalla el alcance de cada uno de estos principios:

a. Principio a una justicia pronta y eficaz

Este principio determina que la administración de justicia penal debe actuar en el menor tiempo posible de forma certera, el ser eficaz implica producir el efecto esperado, a través de decisiones justas y apegadas a derecho en el menor tiempo posible, es así que bajo este fundamento se regula el procedimiento abreviado.

La eficacia como principio procesal se encuentra determinada en el art. 169 de la Constitución de la República que sostiene que las normas procesales consagrarán este principio entre otros más, la eficacia tiene relación con el buen proceder que se espera de la administración de justicia a través de decisiones que no solo sean ágiles sino apegadas a derecho, tutelando así los derechos y garantías de las personas.

La eficacia como principio procesal se vincula directamente con la prueba, en este sentido una de las garantías del debido proceso que señala el art. 76 num. 4 de la

Constitución de la República es que la obtención y actuación de pruebas en el procedimiento penal han de observar estrictamente los preceptos y mandatos legales y constitucionales so pena de carecer de eficacia probatoria, es decir que no tendrán validez alguna, de esta forma la prueba obtenida o actuada no producirá el efecto esperado.

El art. 454 num. 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que trata sobre los principios que rigen el anuncio y práctica de la prueba consigna el principio de exclusión en los siguientes términos “Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal”¹², también por mandato constitucional las actuaciones del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal se rigen por este principio al tenor de lo dispuesto por el art. 198 de la Constitución de la República.

De lo anteriormente dicho se puede establecer que los elementos de convicción que se constituyen en elementos de prueba, pueden estar contaminados y carecer de valor alguno, sin embargo, dentro del procedimiento abreviado los mismos de forma precipitada sin mayor control de la defensa y sin que se puedan controvertir sirven de fundamento para obtener del procesado una declaración de culpabilidad que merece una sentencia condenatoria al tenor de lo dispuesto por el inc. 1º del art. 637 del COIP, al admitir el hecho fáctico que se le atribuye.

En entrevista que realizó Johana Campaña, al Dr. César Urrutia Flores, Defensor Público Penal sobre el tema dice que en su experiencia de ex juzgador la aceptación de los hechos fácticos por parte de un procesado no puede tomarse como una aceptación de culpabilidad pues en procesos sometidos al procedimiento abreviado en muchas ocasiones tienen falencias en la recolección de datos de convicción.¹³

b. Principio de acceso a la justicia

Este principio se muestra como fundamental dentro de un Estado definido como “constitucional, de derechos y justicia”, por él se busca de la administración de justicia

¹² Ecuador, *Código Orgánico Integral Penal (2014)*, en *Registro Oficial, Suplemento*, No.180 (10 de febrero de 2014), art.454. En adelante se cita este Código como COIP.

¹³ Johana Estefanía Campaña Jarrín, *Incidencia jurídico penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana. Tesis previa a la obtención del título de abogado* (Universidad Central del Ecuador, 2014), 60. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>

resoluciones en derecho a través de las formas instituidas en la ley penal, las cuales deben garantizar los derechos de las personas y solventar las necesidades que demandan una justicia pronta y eficaz.

El acceso a la justicia demanda además que el procesado tenga los medios necesarios para la defensa técnica a través de un profesional en derecho idóneo que vele por los propios intereses dentro del procedimiento penal, este principio la Constitución de la República lo garantiza a través de la Defensoría Pública, instituida como un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es “garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por un estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”¹⁴

En aplicación a este principio, el procedimiento abreviado se encuentra regulado como un procedimiento especial destinado para el conocimiento de aquellos delitos menos graves y que más inciden en la sociedad, instituyéndose para muchos en una alternativa idónea y rápida frente al tortuoso procedimiento penal ordinario, haciéndose de esta forma más accesible la justicia al ciudadano.

Resulta un hecho que el procesado frente a un procedimiento largo y tortuoso como el ordinario penal y ante la amenaza de una pena mayor, acceda a la aplicación de un procedimiento sumario que le garantiza la aplicación de una pena más benigna, procedimiento del cual se “benefician” no solo el procesado quien consiente en la aplicación del procedimiento así como en la admisión del hecho que se le atribuye “coaccionado”, pues no debería mediar condicionamiento alguno a modo de que “si no conscientes en la aplicación del procedimiento y no admites el hecho que se te atribuye, ya verás lo que te pasa”.

Luigi Ferrajoli en relación a la aplicación de este tipo de procedimientos dentro del Código de Procedimiento Penal Italiano de 1988 sostiene “finalmente, ha acuñado una serie de procedimientos especiales que están en las antípodas del sistema de las garantías procesales y que amenazan con perpetuar, o, lo que es peor, con reforzar y legitimar, culturas y praxis inquisitivas que se desarrollaron en la época de la emergencia”¹⁵, en tal sentido procedimientos donde se demanda una admisión del

¹⁴ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, art. 89

¹⁵ Luigi Ferrajoli, “Las lesiones legales del modelo constitucional del proceso penal” en Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps) *El procedimiento abreviado* (Argentina: Editores del Puerto, 2001), 32

hecho fáctico que no constituye otra cosa que una confesión firmada o declaración de culpabilidad, que debe ser ratificada en audiencia, se alinea a un sistema inquisitivo medieval, más no a un sistema acusatorio donde el debate procesal debe centrarse en la producción de prueba y la contradicción a fin de que la valoración sea objetiva en búsqueda de la “verdad real o histórica” y despeje cualquier duda razonable sobre la responsabilidad penal de procesado.

c. Principio de legalidad

La legalidad es un principio ampliamente difundido y reconocido en todo el mundo, en el Ecuador este principio se encuentra consagrado en el art. 76 num. 3 de la Constitución de la República, que dice:

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento¹⁶.

El principio de legalidad contempla el ámbito sustantivo como procesal, demandando que todo procedimiento penal tenga un fundamento o sustento legal, prohibiendo que una persona sea juzgada sino existe un procedimiento previamente establecido en la Ley, es así que el art. 5 num. 1 del COIP dice en referencia a este principio que “no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. [...]”¹⁷

La legalidad frente al hecho delictivo debe ser instituida por el Estado a través de la ley y los órganos competentes, para el efecto se establecen procedimientos legales como el procedimiento abreviado que ponen en juego el poder coercitivo del Estado que debe observar los derechos y garantías de las personas que han incurrido en agravio penal, caso contrario las actuaciones procesales y aún el procedimiento en sí carecería de valor y sería nulo. Para Mario E. Corigliano “el principio de legalidad

¹⁶ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, art. 36

¹⁷ COIP, art.5 num.1.

procesal constituye una garantía para los particulares y una exigencia de seguridad jurídica, así también una limitación al poder punitivo del Estado”¹⁸.

El principio de legalidad conlleva la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal definiendo la seguridad jurídica en el accionar de la administración de justicia que no puede ser discrecional sino reglado, en este sentido el Código Orgánico Integral Penal determina que el ejercicio de la acción penal pública corresponde a la Fiscalía, cuyo rol dentro del sistema acusatorio es de tal trascendencia que llega a desequilibrarlo, siendo censurable que bajo estas circunstancias dentro del proceso abreviado acuerde la calificación jurídica del hecho punible y se negocie la pena que obligatoriamente a de aplicar el juez al procesado, pues en ningún caso ésta podrá ser superior o más grave a la sugerida por la fiscalía.

d. Principio de simplificación

Este principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República en el art. 169 que dice “[...] las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso [...]”

La simplificación de las normas procesales es uno de los principales argumentos que sustentan al procedimiento abreviado, es así como del procedimiento penal ordinario que contempla una fase de investigación previa y tres etapas de procedimiento, cada una con los respectivos plazos, vicisitudes y vericuetos, se arriba al procedimiento abreviado que en lo principal elimina la etapa de juicio para darle al procedimiento penal mayor celeridad, eliminando y suprimiendo actuaciones procesales que se exigen de parte del juzgador y los sujetos procesales, a fin de tornar más ágil y sencillo el procedimiento penal “manteniendo” la intangibilidad de los principios del debido proceso y así no afectar la validez.

Si bien es cierto que dentro del procedimiento penal ordinario se han desarrollado una serie de garantías a fin de tutelar los derechos del procesado que se traducen en actuaciones y diligencias procesales, mismas que llegan a dilatar el procedimiento no pudiendo ser desconocidas, también es cierto que frente a esta realidad y la necesidad de procurar una administración de justicia eficiente, se buscan

¹⁸ Mario E. Corigliano, *Juicio abreviado una imposición de criterios de oportunidad en el sistema penal*. Derecho y cambio social: No.21 (s.f), 8
 <http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/Abreviacion_del_proceso_penal.pdf>. Consulta: 24 de marzo de 2016.

alternativas de procedimiento para aquellos delitos que no causan mayor conmoción social, dado que el *ius puniendi* viene a ser la última alternativa de corrección del Estado frente al ciudadano.

Si al cúmulo de actuaciones y diligencias procesales que conlleva el procedimiento penal ordinario se suman las argucias legales de las que se valen ciertos sujetos procesales para dilatar el procedimiento, este se torna interminable, siendo un requerimiento para los mismos que actúen con base a la lealtad y buena fe al momento de ejercer los derechos y obligaciones procesales aun cuando en muchos casos así no se lo hace.

El procedimiento abreviado sin duda se muestra como una opción ante los requerimientos de la ciudadanía de una administración de justicia diligente, siempre y cuando no exista la menor duda de que los derechos y garantías procesales son respetados, ahora teniendo por objetivo este tipo de procedimiento eliminar la etapa de juicio donde se actuará y se controvertirá la prueba que sustentará el fallo del juzgador, dicho procedimiento contempla una intención soterrada que a criterio de la autora sin duda vulnera derechos y garantías básicas del debido proceso cuando la decisión del juez se sustenta en lo principal, en la admisión de culpabilidad del procesado.

e. Principio de celeridad procesal

Consagrado constitucionalmente en el art. 169, se dirá que en el ámbito penal es donde más se hace realidad aquella máxima de que “la justicia que tarda ya no es justicia” en este sentido éste principio se muestra indispensable cuando se ponen en juego derechos y garantías básicas del ser humano que tienen que ver con la integridad y libertad personal, por tal motivo dentro de todo procedimiento penal la aplicación de la ley debe ser inmediata omitiendo dilaciones de cualquier tipo procurando optimizar el tiempo, evitando las diligencias innecesarias o bien simplificándolas en procura de una resolución ágil al amparo de lo dispuesto por la ley.

Este principio se lo aplica a través de la imposición de sanciones a quienes entorpecen el correcto desenvolvimiento de la causa así como al prescindir de la voluntad o actividad de las partes para el desarrollo.

A través del procedimiento abreviado se aplica la celeridad procesal, instituido como un procedimiento especial y sumario simplifica el ordinario despojándose del debate, el conflicto y la controversia, destinado al tratamiento de delitos menos graves

donde el procesado admite la culpabilidad haciendo innecesaria la contradicción de la prueba y la producción de más elementos de convicción.

f. Principio de economía procesal

Este principio también se encuentra consagrado en el art. 169 de la Constitución de la República y tiene que ver con los recursos tanto humanos como materiales que se ponen en juego frente a cualquier procedimiento penal, siendo el desgaste directamente proporcional con el tiempo empleado en la tramitación.

La labor extenuante a la que son sometidas las judicaturas con una carga de trabajo exorbitante conviene ser atenuada a través de una adecuada organización del trabajo, la omisión de diligencias o trámites innecesarios así como la concentración de los mismos haciendo más eficientes a la administración de justicia y los recursos.

Y justamente el procedimiento abreviado está concebido para tales efectos de desconcentración del trabajo de las judicaturas así como la optimización de recursos.

g. Principio de oportunidad

Para Mario E. Corigliano la aplicación del procedimiento abreviado “implica, necesariamente, una franca imposición de criterios de oportunidad”¹⁹. Por el principio de oportunidad se faculta al fiscal, existiendo hechos de características punibles; renuncie, suspenda o interrumpa la acción penal, en atención al tipo de delito, las características y la leve conmoción social que imprime en la comunidad.

La aplicación del procedimiento abreviado es una medida de política criminal que se sustenta en el principio de oportunidad, pues ambos buscan hacer frente a la criminalidad, dando solución a los apremiantes problemas en que se debate la administración de justicia, que no se da abasto con los hechos delictivos que se comenten en la sociedad y que requieren una diferenciación en cuanto a procedimiento en atención a la gravedad, pues resulta un desatino por decir lo menos que en los delitos menos graves se aplique el procedimiento penal ordinario dadas todas las vicisitudes que este contempla y que implican un desgaste innecesario de recursos humanos y materiales tanto para el Estado, como para el procesado y la víctima, a quien deja fuera del conflicto “expropiando los derechos y privilegiando la reacción penal por ante la reparación a él debida a consecuencia del injusto sufrido”²⁰.

Actualmente resulta un hecho que el problema de la criminalidad se instituyó en un grave problema que demanda soluciones innovadoras y apremiantes ante lo cual

¹⁹ Ibid., 1.

²⁰ Ibid., 2.

se han establecidos diversos mecanismos y procedimientos especiales de la mano de principios procesales como el de oportunidad que buscan en lo principal simplificar el procedimiento penal ordinario dando soluciones rápidas y efectivas a los acuciantes problemas de criminalidad a los que se enfrenta la sociedad.

4. Principios procesales que se vulnerarían con la aplicación del procedimiento abreviado

Frente a los antes señalados principios que sustentarían el procedimiento abreviado, se encuentran otros principios que se vulneran con la aplicación de dicho procedimiento.

Dentro de los principios procesales que se vulnerarían con la aplicación del procedimiento abreviado, destacan:

- Principio de contradicción
- Principio de inmediación
- Principio de igualdad ante la ley
- Principio de no autoincriminación
- Principio de inocencia

a. Principio de igualdad ante la ley

Este principio a través de la aplicación del procedimiento abreviado se ve vulnerado desde diversos puntos de vista, para comenzar se dirá que la igualdad ante la ley se encuentra consagrada en el art. 11 num. 2 de la Constitución de la República, principio recogido a través de diversos instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos lo consagran, normas del Derecho Internacional que son de inmediata y directa aplicación conforme lo establece la norma constitucional.

La igualdad ante la ley no solo se refiere al modo o trato que haga la ley respecto del individuo sino también a los privilegios o prerrogativas de los que goza a través de ella, es así que este principio se vincula con otros como el principio de contradicción, al cual tienen derecho en el procedimiento penal todas las personas sin distinción alguna, prerrogativa que sin duda se encuentra vulnerada dentro del procedimiento abreviado que se sustenta en la autoinculpación del procesado y en la omisión del juicio contradictorio.

Por otra parte el principio de igualdad ante la ley se puede ver vulnerado a través de la aplicación de sentencias que establezcan condenas distintas frente a hechos

similares e incluso idénticos, situación que puede presentarse frente al poder negociador de la fiscalía y aún ante el cabal desenvolvimiento del abogado defensor, desenvolvimiento que también puede fallar en perjuicio del procesado, así en la práctica se obtendrían sentencias condenatorias distintas por hechos similares, existiendo además la posibilidad que por hechos similares, en unos delitos se aplique el procedimiento abreviado y en otros no, entendiéndose que el procedimiento penal ordinario implica una pena mayor para el procesado, siendo el fiscal quien propone discrecionalmente la aplicación o no del procedimiento abreviado.

Por último la fiscalía como sujeto procesal no actúa en condiciones de igualdad frente a los demás sujetos procesales pues cumple diversos roles, todos ellos de gran trascendencia que terminan determinando la suerte del procesado, pues la fiscalía actúa acusando al procesado, investigando el hecho y dentro del procedimiento abreviado dirigiendo la negociación y será este quien determine la calificación jurídica del hecho y la pena, roles que sin duda ejercen presión en el procesado al momento de aceptar la aplicación del procedimiento abreviado y admitir el hecho fáctico que se le atribuye, tal es el poder que ejerce la fiscalía que incluso limita el poder de decisión del juzgador quien al momento de resolver a través de una sentencia condenatoria, no puede imponer una pena superior o más grave que aquella sugerida.

La respecto Ferrajoli sostiene que “el ministerio público ha sido investido de un enorme poder de predeterminación tanto del método como del contenido del juicio, lo que contradice la naturaleza de ‘parte’ en situación de igualdad con el imputado – que es el rasgo más característico del sistema acusatorio–”²¹

b. Principio de contradicción

Inherente al sistema acusatorio este principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República y se manifiesta como uno de los principios rectores de la administración de justicia, así lo determina el art. 168 num. 6 de la Constitución que dice “la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”

²¹ Ferrajoli, “Las lesiones legales del modelo constitucional del proceso penal”, 48

Conforme lo establece el art. 76 num. 7 lit. h) de la Constitución de la República, el derecho a la defensa es una de las garantías básicas del derecho al debido proceso, este derecho comprende a la vez otras garantías de las cuales goza toda persona, como la de “presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en contra”, de esta forma queda consagrado el principio de contradicción como una garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, en concordancia con esto, el art. 5 del COIP determina de forma expresa que el debido proceso penal se rige por este principio, del cual dice en el num. 13 “los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra.”

De lo expuesto anteriormente se puede deducir la relevancia del principio de contradicción dentro del procedimiento penal, siendo una garantía inherente al derecho a la defensa y al debido proceso, resultando el acatamiento ineludible, inexcusable e inexpugnable, pues sin la aplicación mal puede existir un debido proceso legal.

El derecho de audiencia fundamentado en el principio de oralidad no se remite únicamente a que el procesado pueda ser solo escuchado, sino que este tiene derecho a rebatir, controvertir y contradecir los hechos que se le imputan así como los elementos de convicción presentados en contra que se constituirán en prueba, con otros de la misma naturaleza, siendo una obligación de la administración de justicia posibilitar dicha aplicación a través de los órganos competentes pertinentes haciendo efectiva la tutela judicial que también ampara al procesado.

La producción de prueba dentro de cualquier procedimiento penal se instituye además como un derecho que no puede ser coartado de ninguna manera pues deben existir los elementos necesarios que sustenten la convicción del juzgador fuera de toda duda razonable respecto de la culpabilidad del procesado al momento de dictar una condena, caso contrario la administración de justicia se aleja del objetivo principal.

El derecho a contradecir la prueba es un derecho trascendental para el procesado, sin el cual éste se mira en un estado de indefensión que no puede ser amparado por la norma legal, por el principio de contradicción se evidencia también el principio de igualdad por el cual las partes dentro del procedimiento penal se miran como iguales frente al juzgador al momento de argumentar las posiciones y sustentarlas con los debidos recaudos procesales, mal se puede decir que este principio

se aplica dentro del procedimiento abreviado a través de la audiencia pública y oral que se lleva a cabo, cuando el procesado lo que hace es ratificarse en el consentimiento prestado para la aplicación de dicho procedimiento pues no hay prueba que rebatir ni hechos que contradecir.

c. Principio de inmediación

Si bien la noticia del delito llega a conocimiento del juez de una forma indirecta, el juzgamiento requiere poner en contacto directo al juez con los sujetos y recaudos procesales, testigos, documentos y demás instrumentos que se hayan recabado a fin de que tenga una percepción clara de los hechos, así como de los elementos de prueba aportados, el énfasis en la proximidad de tiempo o espacio determinará la aplicación o no de este principio que demanda una actuación física y a viva voz del juzgador. Dando este principio relevancia a la actuación del juzgador dentro del sistema acusatorio concierne también al fiscal, dados los roles y atribuciones que este cumple durante el procedimiento penal público la práctica de este principio.

El Código Orgánico Integral Penal en el art. 5 num. 17, sobre este principio, dice: “la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso penal”, entendiéndose que este principio tiene que ver con la forma como el juez en lo principal y las sujetos procesales, participan directamente en los actos procesales tendientes a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado o ratificarla.

Este principio procesal se encuentra consagrado en el art. 75 y 169 de la Constitución de la República, instituyéndose en un eje transversal de la administración de justicia, en el ámbito penal toma singular importancia dentro del sistema acusatorio que deja de lado la tarea investigadora del juez para dar relevancia a la tarea concreta de administrar justicia, requiriéndose para el efecto que éste tome contacto directamente con los elementos de prueba en audiencia oral y pública, a fin de sustentar la decisión en Derecho.

Es en la actuación o evacuación de la prueba en audiencia oral y pública, donde el juzgador aplica en lo principal este principio cuando los testigos rinden testimonio en presencia del juzgador y las demás pruebas son puestas a consideración en el acto,

sin que existan intermediarios de por medio, a fin de las pueda palpar o percibir lo más cercanas a la realidad histórica de los hechos.

Dentro del procedimiento penal los sujetos y las actuaciones procesales, sobre todo aquellas que han de constituirse en prueba, deben relacionarse de forma directa con el juez a fin de que éste las pueda apreciar de mejor manera para la valoración, es así que el Código Orgánico Integral Penal determina en el art. 454 num. 2 refiriéndose a la inmediación que “las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en la práctica de la prueba” tomando en consideración que la prueba se práctica únicamente en audiencia de juzgamiento.

Sin embargo en el procedimiento abreviado la audiencia de “juzgamiento” no tiene tal objetivo pues no se requiere de la inmediación del juez para la constitución del elemento de prueba dado que existe una declaración de culpabilidad de parte del procesado y es en base a tal declaración que se dictará sentencia condenatoria, resultando intrascendentes de existir, los demás elementos probatorios que no serán objeto de contradicción.

d. Principio de no autoincriminación

Como una de las garantías del debido proceso se encuentra el derecho a la defensa el mismo que al tenor de lo dispuesto por la Constitución de la República en el art. 77 num. 7 lit. c) incluye el derecho a no ser forzado a “declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar responsabilidad penal”, frente a este derecho resulta inaceptable la aplicación del procedimiento abreviado bajo la “condición” de que el procesado admita el hecho que se le atribuye lo que implica una confesión o declaración de culpabilidad, más aún si en este tipo de procedimiento cabe tan solo sentencia condenatoria.

Originándose la propuesta de parte de la fiscalía para la aplicación del procedimiento abreviado, esta no es más que una invitación forzada a que el procesado admita un hecho que bajo otras circunstancias no lo haría, ante el beneficio de una pena reducida y la inminencia de una pena mayor si no consiente en dicho procedimiento.

Para algunos el consentimiento del procesado para la aplicación del procedimiento abreviado es netamente voluntario teniendo incluso la posibilidad de retractarse dentro de la audiencia oral y pública que se lleva a efecto para la

tramitación, sin embargo, son muchas las razones por las que el procesado puede consentir en la aplicación, auto incriminándose aun siendo inocente al ser consciente por ejemplo del rol que cumple la fiscalía en el proceso penal, ser objeto de una pena mucho mayor si no accede, no contar con los recursos necesarios para hacer frente a un largo proceso legal o no contar con los medios de prueba que requiere la defensa, entre otras.

e. El principio de inocencia

Dada la trascendencia de este principio se lo analizará en forma separada, Luis Pásara señala que la presunción de inocencia “busca asegurar que la responsabilidad penal sea rigurosamente establecida, de modo que la imposición de una sanción sea fruto de un proceso en el que se haya alcanzado el mayor nivel posible de certeza, donde la carga de prueba corresponde al acusador”.²²

Dicha garantía es violentada cuando el procesado debe admitir culpabilidad frente al hecho fáctico sin que se haya controvertido la prueba y demostrado culpabilidad, resulta inaceptable en materia penal aquel aforismo jurídico que sostiene a confesión de parte, relevo de prueba; mismo que encaja perfectamente con el requerimiento inquisitivo medieval y que la legislación ecuatoriana acoge para la aplicación, a través del procedimiento abreviado bajo el sortilegio de una benigna condena a cambio de la autoinculpación, proposición que si bien tiene el consentimiento del procesado a través del abogado que le represente, se materializa por obra de la fiscalía, encargada de la negociación.

Por otra parte el principio de inocencia está íntimamente ligado al derecho a la defensa que se ve conculcado cuando el procesado no puede ejercerlo al ser coaccionado para admitir la culpa frente a un mal mayor, que resulta ser el sometimiento al procedimiento penal ordinario cuyas consecuencias serían más perjudiciales.

Como señala María Inés Horwitz²³ “el Procedimiento Abreviado se establece como una solución rápida de conflictos y no como una forma de encontrar la verdad

²² Luis Pásara, *El uso de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la administración de justicia* (2da Ed). (Quito-Ecuador: Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ecuador, 2009), 50.

²³ María Inés Horwitz, “*Algunas formas de acuerdo o negociación en el Procedo penal: tendencia del derecho comparado*”, *Revista de Ciencias Penales*, Instituto de ciencias penales (Santiago, Chile), Tomo XL, No.2, (1990/1993) 27-40, 28

material o de realización de justicia”²⁴, lo cierto es que a través del procedimiento abreviado se obtiene una solución rápida al conflicto, sin embargo, para el efecto el procesado ha de renunciar a determinados derechos y garantías constitucionalmente consagradas dentro del sistema jurídico ecuatoriano.

Para el análisis del principio de inocencia en relación al procedimiento abreviado cabe hacer referencia a los antecedentes de este en el derecho anglosajón tanto en Europa como en Norteamérica, en el sistema legal norteamericano se desvanece el principio de inocencia cuando al procesado directamente se le pregunta cómo se declara “culpable o inocente”, bastando la declaración de culpabilidad para excusar al juzgador, el jurado y las partes procesales la obligación de establecer la misma. En el sistema legal europeo, si bien el procesado mantiene la condición de inocencia al no exigírsele se declare inocente o culpable, es requerida la renuncia a un juicio, esto ante el ofrecimiento de la aplicación de una pena más benigna que no tuvo los efectos esperados determinando el fracaso en Europa de tal procedimiento²⁵.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varios casos respecto a la presunción de inocencia, siendo coincidente en que los jueces deben analizar los elementos de prueba que existe en cada caso, este análisis se lo debe realizar sin ningún tipo de prejuicios, entendiéndose que el juez únicamente debe formarse un criterio de culpabilidad cuando quien acusa demuestre que se ha cometido un delito, siendo Fiscalía sobre quien recae esta atribución; sin embargo en nuestro país este hecho se da a la inversa y existen ciertos sectores que consideran que es el procesado quien debe demostrar que no ha cometido ningún delito.

Adicionalmente la CIDH considera que la presunción de inocencia es relevante y está estrechamente relacionada al derecho a la defensa en el desarrollo del proceso hasta el momento que exista una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad, se hace énfasis en que se presumirá la inocencia de toda persona acusada de un delito y que se la debe tratar como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad en un juicio público en el que se respete las garantías del debido proceso.

En Ecuador prácticamente todos los días se trasgrede este derecho que tienen las personas inmersas en un proceso penal de ser tratadas como inocentes mientras no

²⁴ Carmen Gloria Agurto Casanova, “Procedimiento abreviado: negociación de la inocencia del imputado” (memoria para optar por el grado académico de licenciado en ciencias jurídica y sociales, Universidad de Talca, Chile, 2002), 10-11, http://dspace.uta.cl:8888/ciencias_juridicas_y_sociales/agurto_casanova.pdf.

²⁵ *Ibíd.*, 11.

exista una sentencia condenatoria en firme, pues es común que en medios de comunicación se exponga los rostros y en ocasiones hasta los nombres de las personas aprehendidas aseverando que son autores/as de determinados delitos cuando aún no han sido legalmente procesadas, ni condenadas; esta aseveración es una declaración de culpabilidad que motiva al público a creer en la misma y establece una idea preconcebida de culpabilidad que en muchas ocasiones obliga a los jueces a emitir ciertas sentencias, transgrediendo el derecho a la presunción de inocencia, y transgrediendo adicionalmente la obligación que tiene el Estado de no emitir un juicio ante la sociedad, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal.

En este sentido la Corte Europea de Derechos Humanos considera que “el derecho a la presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad pública”.²⁶ Es por esto que en los casos que las autoridades informen al público sobre investigaciones criminales se lo debe realizar con precaución y cautela sin vulnerar la presunción de inocencia de los detenidos.

Es así que la observación No.13 sobre el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en referencia a la presunción de inocencia sostiene que: “No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. [...] Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso”²⁷.

Para finalizar con el presente capítulo cabe destacar que la presunción de inocencia instituyéndose en una garantía elemental del debido proceso se encuentra íntimamente ligada al derecho humano a la defensa y al deber estatal de esclarecer los hechos a fin de que las víctimas conozcan la verdad, teniendo el derecho a la verdad un reconocimiento en las distintas instancias judiciales nacionales e internacionales aun cuando no se encuentre consagrado de forma expresa en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

²⁶ Eur. Court H.R., case *Allenet de Ribemont v France*, judgment of 10 february 1995, Series A no. 308, párrs.36 y 38. Citado en Corte IDH, caso *Lori Berenson vs. Perú*. Serie C N° 119. Sentencia de 24 de noviembre de 2004, párrafo 159

²⁷Naciones Unidas, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos: Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos Creados en Virtud de Tratados, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 de mayo de 2008, 221, http://civilisac.org/civilisweb/wp-content/uploads/HRI.GEN_1.Rev9_sp-1-1.pdf >. Consulta: 24 de marzo de 2016.

Si bien es cierto que el derecho a la verdad, como tal, se trata de un derecho reconocido de forma explícita en el caso de desapariciones forzadas²⁸, el mismo desde una concepción general procede en el caso de otras graves violaciones de derechos humanos.

En conclusión se puede decir que el procedimiento abreviado aunque permite una descongestión de las salas de juzgamiento en el país y está sustentado bajo una normativa extensa, también vulnera principios establecidos en la Constitución de la República como el debido proceso, presunción de inocencia, no autoincriminación entre otros.

No cabe la menor duda que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental con el que cuenta todo individuo, por lo que este derecho que debe ser reconocido y protegido por el estado, siendo los jueces quienes deben aplicarlo con sujeción a los instrumentos de derechos humanos y a la Constitución, por lo tanto para que se desvanezca la presunción de inocencia es necesario que se pruebe fehacientemente la culpabilidad de la persona procesada con pruebas irrefutables sin lugar a que exista duda razonable.

²⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho a la verdad en AméricaOEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 agosto 2014.
<http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.

Capítulo Segundo

Prácticas del procedimiento abreviado

Teniendo como antecedente instituciones jurídicas del derecho anglosajón como el *plea guilty* –declaración de culpabilidad– o el *plea bargaining* –súplica negociada–, a las cuales se ha referido el presente trabajo en el capítulo anterior, la aparición del procedimiento abreviado dentro del sistema de administración de justicia penal ecuatoriano tiene como referente la promulgación del Código de Procedimiento Penal del año 2000 que entró en vigencia en julio de 2001 y que trajo consigo la implementación de un nuevo modelo de administrar justicia penal que buscó dejar atrás el caduco sistema inquisitivo para dar paso al acusatorio penal sustentado en principios tales como la publicidad, oralidad, inmediación y contradicción.

Cabe destacar que desde que hizo su aparición este tipo de procedimiento en Ecuador, ha contemplado varias adecuaciones que han procurado darle mayor connotación e instituirlo en un verdadero instrumento alternativo de administración de justicia penal, es así que en un principio la normativa penal determinaba que era susceptible de aplicación en aquellos delitos sancionados con pena de prisión de hasta cinco años, ámbito de aplicación que hoy con el Código Orgánico Integral Penal se extiende a las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años.

El procedimiento abreviado es un modelo de justicia negociada o consensual que prima en jurisdicciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando en éste país el procedimiento penal ordinario es el juicio por jurados consagrado constitucionalmente a través de la sexta enmienda de la Constitución norteamericana, el mismo ha caído en desuso con las consecuencias que esto conlleva, dado que el sistema de administración de justicia norteamericano no se daría abasto y que se trata de un procedimiento tortuoso que contempla el gasto de ingentes recursos para los sujetos procesales y el Estado, se puede afirmar que lo ordinario dentro del sistema de justicia norteamericano se ha constituido en lo excepcional.

En el Ecuador al parecer se desea lo mismo dada la carga de trabajo de los operadores de justicia penal, sin embargo en este sentido cabe destacar que lo que viene a fundamentar al procedimiento abreviado es su fin utilitario que contrasta con

la tutela de derechos, dadas sus particulares características, aun cuando de su aplicación se puede establecer claras y obvias ventajas que tienen que ver con la preservación y ahorro de recursos humanos y materiales para la sociedad que demandaría un proceso ordinario, el establecimiento de soluciones ágiles y rápidas al conflicto penal desvaneciendo la incertidumbre para las partes es así que el procesado de ante mano conoce cuál sería el tope de la mínima pena que se le impondría, además la percepción en relación al trabajo que cumple la administración de justicia penal mejoraría evidentemente con el descongestionamiento de las causas procesales.

Es así que dentro del procedimiento abreviado el fiscal y el procesado de la mano de la defensa pública o privada llegan a un acuerdo en cuanto a dos hechos trascendentales para el procesado como son la calificación jurídica del hecho punible y la pena, sin dejar de lado de ser el caso, el derecho de la víctima a la reparación integral de los daños causados por la infracción, pudiendo la fiscalía solicitar una mínima pena de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal e incluso establecer una acusación por un hecho más leve, en todo caso este acuerdo es puesto a consideración del juzgador quien viene tan sólo a refrendarlo, acuerdo que en teoría debería darse en igualdad de condiciones de las partes procesales.

En la realidad no existe igualdad de condiciones, dada las amplias atribuciones de las que goza la fiscalía y la incidencia que tiene en el ejercicio de la acción penal pública, mostrándose en algunos casos incluso su accionar intimidante para el procesado que a fin de evitar una condena mayor y un tortuoso procedimiento, se ve abocado a consentir en la aplicación de este procedimiento que requiere de su parte la admisión del hecho que se le atribuye o imputa, desvaneciéndose de esta manera el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ser humano y al cual se ha referido el presente trabajo en el capítulo anterior.

Sustentado el procedimiento abreviado en el principio de oportunidad reglada se busca a través de su aplicación que sea la fiscalía quien lo dirija desde un primer momento instituyéndose en una especie de negociador, algunos incluso hablan hasta de un mediador, sin embargo, la fiscalía no es ajena e imparcial al proceso de negociación o mediación siendo parte procesal relevante encaminada de conformidad con lo que establece la Constitución de la República a establecer una acusación, por otra parte cabe destacar que “la posibilidad de negociación que tiene el fiscal en nuestro sistema procesal penal, no fue concebida en términos amplios, como sucede

en el sistema anglosajón, sino que sólo procede dentro de los términos señalados por el legislador”²⁹.

Santiago Marino Aguirre, tratadista que se expresa a favor del procedimiento abreviado, sostiene que este procedimiento especial permite una eficaz concentración de los recursos y operadores de justicia en la persecución de los delitos más graves y que provocan mayor alarma social³⁰, y además evita el colapso del sistema penal tan común en Latinoamérica.

Ramiro Ávila Santamaría, no duda sobre la contraposición de este procedimiento con principios del debido proceso y sostiene “[e]l procedimiento abreviado rompe y viola todas las garantías del debido proceso conquistadas en más de doscientos años de derecho penal liberal. Ahora se puede condenar en juicio sumario, se admite la famosa máxima que era propia del derecho civil: “a confesión de parte, relevo e prueba”, se atenta contra el principio que fue la principal arma contra la tortura en el proceso, que es la prohibición de autoinculpación”³¹.

No cabe duda que el procedimiento abreviado va de la mano del populismo penal, Máximo Sozzo al respecto refiere:

[...] hay iniciativas que tienen efectos tan poco marcados, y un ejemplo muy común en América Latina son las reformas legales que buscan restringir la posibilidad de excarcelación, es decir buscan desde el punto de vista del texto legal hacer casi automática la aplicación para determinados casos delictivos de la prisión preventiva. [...]. En síntesis, las reformas que se han producido de la mano de la emergencia del populismo punitivo, tienen un impacto práctico trascendental. El análisis de populismo penal no se detiene en la constatación de cómo funciona como una tendencia penal, sino que abarca en la indagación de sus efectos, pues se basa en información empírica y de información oficial válida y confiable en el funcionamiento del sistema penal.³²

Si bien existen posiciones a favor del procedimiento abreviado, existen un sin número de críticas ante el mismo dentro de las más usuales que se viola derechos del debido proceso, así como la gran discreción que tiene el fiscal se considera que ese

²⁹ María Elena Santibáñez Torres, “La justicia negociada y el procedimiento abreviado”, Instituto Chile de Derecho Procesal, 03 de diciembre de 2012: 1 <http://www.ichdp.cl/la-justicia-negociada-y-el-procedimiento-abreviado/>

³⁰ Santiago Marino Aguirre, *El Juicio Penal Abreviado* (Buenos Aires: Edit. Abelardo-Perrot, 2001) 112.

³¹ Ramiro Ávila Santamaría. *La (IN) Justicia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos: Una mirada desde el garantismo penal* (Quito: Ediciones Legales EDLE S.A./Universidad Andina Simón Bolívar, 2013) 23

³² Máximo Sozzo, “¿Qué es el populismo Penal?”, *Revista Urvio* No. 11, (2012): 120, <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/3974/RFLACSO-11-U11-Gomez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

poder coercitivo presiona al acusado a su confesión, pues la sentencia en juicio ordinario sería más grave, Ecuador y gran parte de Latinoamérica se encuentra elaborando reformas para resolver los problemas penales propios de cada país, pero únicamente han encontrado solución con prisión conculcando la libertad.

2.1. El procedimiento abreviado en el proceso penal de Ecuador

El procedimiento abreviado en el proceso penal ecuatoriano a más de responder a una corriente progresista de la doctrina y el derecho comparado busca dar soluciones a los graves problemas que la congestión de los procesos penales provoca en el correcto accionar de la administración de justicia penal en el Ecuador que lastimosamente aun hoy en día no se da abasto.

Con defensores y detractores, el procedimiento abreviado pone en pugna varios principios que se encuentra debidamente consagrados en la Constitución de la República así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos entre los cuales destacan el principio de celeridad y oportunidad frente al principio de presunción de inocencia, de no auto incriminación, de igualdad entre las partes, de inmediación y el de contradicción de la prueba.

Como parte de un conjunto de soluciones alternativas al proceso penal ordinario, complejo en su naturaleza y lleno de vicisitudes, el procedimiento abreviado busca en el Ecuador por una parte descongestionar la carga de trabajo que tienen los operadores de justicia en el ámbito penal y por otra brindar al ciudadano soluciones rápidas a sus requerimientos de administración de justicia, soluciones que demandan el respeto irrestricto a los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, entendiéndose que el procedimiento abreviado de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal se lleva a efecto en una sola audiencia oral y pública.

Si bien el procedimiento abreviado se establece como una alternativa al procedimiento penal ordinario, el mismo no comprende la generalidad de los delitos de acción pública sino tan sólo aquellos de menor gravedad cuyo agravio a la sociedad puede ser objeto para una rápida solución sin vulnerar los derechos y garantías de las partes involucradas.

Por otra parte las ventajas que conlleva la aplicación de un procedimiento abreviado son puestas en tela de juicio cuando la celeridad y el descongestionamiento

de la carga de los juzgados prima frente a la tutela de derechos del procesado, conminado a admitir su culpabilidad que se traduce en la admisión del hecho que se le atribuye, vulnerándose el principio de presunción de inocencia a fin de que proceda dicho procedimiento so pena de un agravamiento en la pena como si su responsabilidad dependiera de que se aplique o no tal procedimiento, es así que de conformidad con lo dispuesto por el art. 635 numeral 3 “la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye”.

La aplicación del procedimiento abreviado conlleva para el procesado una reducción de la pena que obviamente no la tendría si se aplica el procedimiento penal ordinario, en este sentido el art. 636 en su inc. 3º determina que la rebaja de la pena no puede ser “menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal”, pena que será sugerida por la fiscalía como resultado del “análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes” de conformidad con lo previsto por el Código Orgánico Integral Penal, la sugerencia que hace la fiscalía respecto de la aplicación de la pena resulta ser vinculante en la medida que en ningún caso la misma puede ser superior o más grave lo que deja a salvo la posibilidad de que la pena impuesta por el juzgador sea más benigna a la sugerida por la fiscalía.

Conforme lo establece el art. 636 del COIP es la fiscalía quien propone al procesado la aplicación del procedimiento abreviado, acordando con el procesado y su defensor la calificación jurídica del hecho punible y la pena, dejándose en claro que dentro del proceso penal no existe la igualdad entre las partes tratándose de la fiscalía y los sujetos procesales dadas sus amplias atribuciones, correspondiéndole a la fiscalía el ejercicio de la acción penal pública, por otra parte hay que recordar que el Código de Procedimiento Penal del año 2000 en primera instancia determinaba que el fiscal o el imputado podían presentar el escrito acreditando los requisitos de admisibilidad del procedimiento abreviado³³, de esta forma no era facultad discrecional del agente fiscal solicitar o no la aplicación de dicho procedimiento, atenuando además su incidencia.

Al procedimiento abreviado lo regula el Código Orgánico Integral Penal del art. 635 al 639, dichos artículos establecen las reglas a las cuales se ve sometido dicho procedimiento así como su trámite que contempla la audiencia de juzgamiento en la cual se dicta la resolución respectiva, que comprende de forma ineludible una

³³ Ecuador, *Código de Procedimiento Penal*, Registro Oficial, Suplemento No.360, 13 de enero del 2000, art.370.

sentencia condenatoria, conforme lo establece el art. 637 inc. 1º del COIP, cabe destacar que el Código de Procedimiento Penal del año 2000 en primera instancia determinaba que el juez podía absolver o condenar, según correspondía³⁴, lo cual si bien se apartaba de la lógica, cuando el imputado admitía el acto atribuido, esto no era irrefutable pues podía ser desvirtuado a través de los elementos de prueba que consten del proceso, esta posibilidad hoy no existe, dado que la admisión del hecho que hace el procesado es de forma simple y llana una confesión que le hace merecedor de una pena concertada ante la inminencia de que se le aplique una mayor en el procedimiento penal ordinario.

El tratamiento indiscriminado que se daba dentro del trámite procesal a los diversos delitos de acción pública sin considerar la gravedad de tales delitos tenía como resultado antes de que apareciera el procedimiento abreviado que un hurto sin agravantes sea concebido procesalmente de igual manera que un asesinato o una violación, lo cual traía como efecto el despilfarro y desgaste de recursos materiales y humanos así como la demora en trámites que dada la naturaleza del delito y el bien jurídico tutelado podían ser de rápida solución, mostrándose desbordado el poder punitivo del Estado que actuaba sin matiz alguno tratándose de delitos graves o no requiriéndose por tales efectos un debido encausamiento procesal de acuerdo a la gravedad del delito que sin vulnerar los derechos del procesado y de la víctima.

La regulación de procedimientos apartados de las vicisitudes del procedimiento penal ordinario está dirigida al establecimiento de soluciones prontas y efectivas de conformidad al caso que lo requiera, actuación encaminada al provecho de las partes procesales y la sociedad en su conjunto que mira con malos ojos a la administración de justicia que tarda y dilata los procesos judiciales.

Son susceptibles de la aplicación del procedimiento abreviado de conformidad con lo que establece el art. 635 num. 1 del COIP “las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años” ámbito de aplicación que comprende un cúmulo de delitos que antes no eran susceptibles de tal procedimiento entendiéndose que con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal el campo de acción para la aplicación del procedimiento abreviado se extiende grandemente lo cual no resulta ser lo ideal en la medida que se vulneren los derechos y garantías constitucionales del procesado o la víctima teniendo como consigna el

³⁴ Ecuador, *Código de Procedimiento Penal*, art.370.

descongestionamiento del trabajo de las judicaturas dando la falsa idea de aplicación del principio de celeridad.

Es decir, lo que vendría en última instancia a pretender la medida es hacer más fácil el trabajo de los operadores de justicia y cambiar la percepción de la ciudadanía respecto del trabajo de la administración de justicia penal, ahora el costo resulta ser alto cuando este tipo de procedimiento llama la atención para un sector de la doctrina que mira cómo el principio de presunción de inocencia se desvanece solapadamente bajo la tutela del poder coercitivo del Estado cuya injerencia en el proceso penal resulta ineludible más aún cuando la fiscalía adopta atribuciones amplias y decisorias, recordando que bajo el esquema actual de justicia penal no existe juicio sin acusación fiscal.

Cumplidos los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 635 del COIP conforme lo establece el art. 635 num. 2 ibídem, el procedimiento abreviado se lo puede presentar con la propuesta de la fiscalía “desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”, si bien esto da un margen razonable de tiempo durante el cual se puede valorar la pertinencia o no de la propuesta mal llamada acuerdo, entendiéndose que la misma debe tener el consentimiento del procesado quien debe estar debidamente asesorado por su defensa en cuanto a qué consiste y las consecuencias que conlleva la aplicación del procedimiento abreviado.

De conformidad con lo que establece el inc. 2º del art. 636 del COIP; que se pueda presentar la propuesta desde la audiencia de formulación de cargos, enerva una de las funciones trascendentales de la fiscalía que comprende al tenor de lo dispuesto por la Constitución de la República en su art. 195 el dirigir la investigación pre procesal y procesal, entendiéndose que la audiencia de formulación de cargos se lleva a efecto cuando la fiscalía cuenta con “los elementos suficientes para deducir una imputación”³⁵.

Teniendo la etapa de instrucción como finalidad “determinar los elementos de convicción de cargo y descargo, que permitan formular o no una acusación”³⁶ en contra del procesado, es decir en la audiencia de formulación de cargos nada se puede establecer en cuanto a la responsabilidad o no del procesado en el hecho que se le imputa, sin embargo, dentro del trámite del procedimiento abreviado los elementos

³⁵ Ecuador, *Código Orgánico Integral Penal*, art.591

³⁶ *Ibíd.*, art.590

que permiten establecer una imputación, resultan más que suficientes para determinar un grado de responsabilidad.

El requerimiento de que la defensa acredite que el procesado presta su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales de conformidad con lo que establece el art. 635 num. 4 resulta ser a criterio de la autora una falacia que lo único que busca es deslindar cualquier responsabilidad del Estado con la aplicación del procedimiento abreviado y el requerimiento de autoincriminación para que el mismo proceda.

Entendiéndose que el tema de la responsabilidad penal atañe a la persona en particular el art. 635 num. 5 determina que “la existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado”, es decir, de ser el delito imputable a varias personas cualquiera de ellas puede optar o no por la aplicación del procedimiento abreviado sin que su decisión arrastre, perjudique o beneficie a los otros.

Una vez cumplidos los requisitos de admisibilidad, el trámite del procedimiento abreviado y su resolución se sustrae a la audiencia oral y pública que se convoca para el efecto donde el juzgador lo aceptará o rechazará, teniendo el mismo 24 horas de recibida la solicitud por parte de la fiscalía para convocar a dicha audiencia. Convocada la audiencia con la asistencia de los sujetos procesales, y aceptado a trámite el procedimiento abreviado se procede a instalar la audiencia donde de conformidad con lo que establece el art. 637 inc. 2º “el juzgador escuchará a la o al fiscal y consultará de manera obligatoria a la persona procesada su conformidad con el procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y sencilla los términos y consecuencias del acuerdo que este podría significarle”.

De esta forma la norma penal es reiterativa frente al requerimiento de anuencia por parte del procesado que ya consta por escrito, con esto lo que se busca es dar legitimidad al hecho de autoincriminación para que proceda a aplicarse el procedimiento abreviado, si bien en teoría el procesado podría retractarse respecto de la aplicación del procedimiento abreviado esto en la práctica resulta difícil cuando las consecuencias de esto se encuentran consumadas y claramente definidas, sustrayéndose estas en la amenaza de la aplicación de una pena mayor a la acordada de proceder el juicio penal ordinario que puede durar años con la consiguiente carga material y humana que esto demanda.

Poco o nada importa que los elementos de convicción recabados, porque no son más que esto, sustenten de forma inequívoca la admisión del hecho que se le atribuye al procesado y este acepta, más aún los hechos de la investigación presentados por la fiscalía no pueden ser objeto de contradicción pues existe una aceptación expresa respecto de los mismos por parte del procesado, quien no puede presentar elementos de prueba destinados a desvanecer su responsabilidad o si quiera rebatir aquellos presentados por la fiscalía, pues esto, dada la naturaleza del procedimiento abreviado y sus resultados es inoficioso, estando el juzgador obligado única y exclusivamente a dictar un tipo de sentencia, la condenatoria.

La concurrencia de la víctima a la audiencia donde se tramita el procedimiento abreviado es optativa pues puede o no acudir, de acudir la víctima a la audiencia tiene el derecho a que el juzgador la escuche a fin de que se tome en consideración sus palabras al momento de dictar sentencia condenatoria y establecer la pena respectiva, si bien durante la audiencia la víctima puede incluso oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado, dicho pronunciamiento poco o nada importa, dado que el juzgador tiene la potestad de estimar su procedencia sin tomar en cuenta dicho pronunciamiento. Cabe señalar que la incidencia de la víctima en la tramitación de este tipo de procedimiento viene a ser nula pues así se colige de lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal en cuyo articulado en relación al procedimiento abreviado casi ni se la nombra.

Dentro del derecho comparado existen casos en que esto no sucede, es así que el Código de Procedimiento Penal Boliviano en su art. 373 párrafo IV por una parte permite que tanto el imputado como la Fiscalía puedan solicitar independientemente que se aplique el procedimiento abreviado y por otra de forma expresa señala que “En caso de oposición fundada de la víctima [...], la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado”³⁷ de esta forma se toma en cuenta a la víctima dentro del procedimiento abreviado y no se la hace a un lado vulnerando sus derechos.

Sustrayéndose el trámite del procedimiento abreviado a una audiencia oral y pública, el art. 637 del COIP en su último inciso determina que si la solicitud ha dicho procedimiento es presentada en “audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abreviado en la misma audiencia”, esto con la finalidad de que darle celeridad a su trámite

³⁷ Bolivia. *Código de Procedimiento Penal*, Ley No1970 de 25 de marzo de 1999, art.373
<http://silep.vicepresidencia.gob.bo/SILEP/masterley/118405>

evitando así que se “realice una nueva” audiencia para tales efecto como dice en su parte final el citado art., esto en concordancia con lo dispuesto por el art. 594 num. 6 que dice “En esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado”.

Al momento de resolver el juzgador tiene dos opciones dictar sentencia condenatoria en base al acuerdo llegado entre la fiscalía y el procesado en cuanto a la calificación del hecho punible y la pena; y, de ser pertinente la reparación integral de la víctima, en este sentido se puede decir que el juzgador no viene nada más que a refrendar el acuerdo llegado entre la fiscalía y el procesado lo que para algunos vendría a contrariar el debido proceso pues tales cuestiones exige “se haga por el juez natural competente”³⁸. O en su defecto de considerar el juzgador que dicho acuerdo vulnera derechos del procesado o la víctima o de alguna forma contraviene lo dispuesto por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos que son de cumplimiento obligatorio para el Ecuador, lo rechazará dice el art. 639 del COIP y “ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario”.

Es importante destacar que dado el último caso, el acuerdo al que han arribado la fiscalía y el procesado no constituirá prueba dentro del procedimiento penal ordinario, mismo que no debe ser considerado por el juzgador, por otra parte en el derecho comparado el Código de Procedimiento Penal de Bolivia en su art. 373 párrafo IV determina que el juez puede negar la aplicación del procedimiento abreviado cuando “el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos” tal posibilidad no se encuentra prevista en el Ecuador entendiéndose simplemente que la admisión del hecho de parte del procesado viene a sustituir la prueba sobre la cual de paso no procede contradicción alguna.

Intercambio perverso que afirma el hecho de que bajo el esquema legal vigente lo que menos importa se establecer la verdad, la certeza histórica y procesal que logra el juzgador a través de la inmediación de la prueba luego del juicio penal ordinario público y contradictorio es sustituida por una certeza que se logra de consuno, pactada por el acuerdo logrado por fiscalía donde el procesado se ve conminado a aceptar una pena leve, no por consentir en la aplicación de la misma sino con el afán de poner fin a la ansiedad e incertidumbre que un procedimiento penal ordinario implica aunque ello le implique perder cualquier posibilidad de ser absuelto en un futuro, lo que

³⁸ Colombia. Corte Constitucional. “Sentencia” C-394/94.
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-394-94.htm>

significa que el procesado está dispuesto a perder incluso por determinado tiempo su libertad frente a la incertidumbre de una condena mayor aun cuando sea inocente.

2.3. Análisis del caso “Mejía”

A mediados de septiembre del año 2014 en la ciudad de Quito algunos sindicatos y grupos sociales realizaron varios actos de protesta en contra de las políticas públicas del Gobierno del economista Rafael Correa Delgado, protestas a las que se sumaron estudiantes del Colegio Mejía el día 18 de septiembre, siendo detenidas 60 personas en horas de la noche al interior y exterior del mencionado colegio ubicado en las calles Vargas y Antonio Ante.

Si bien es cierto, la versión sobre los hechos se muestra distinta según provenga de los manifestantes aprehendidos o de los representantes del gobierno ecuatoriano, lo cierto es que nuevamente se pretende criminalizar la protesta social ahora pretendiéndose callar las voces de jóvenes estudiantes y legitimar los excesos cometidos por la Policía Nacional, institución llamada a la “protección de los derechos, libertad y garantías de los ciudadanos”³⁹ por mandato constitucional.

Correspondiendo el ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía el parte policial de aprehensión de los detenidos se pone en conocimiento del Fiscal de turno doctor Javier Bosquez, al cual se anexa por parte del señor Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional un informe de Inspección Ocular Técnica No.991-2014, en el que se evidenciarían los daños de las veredas, con los semáforos de este sector y daños de una patrulla policial con su respectivo avalúo, se anexan además tres discos con grabaciones registradas en el sistema ECU911.

Con esta información, al contar con elementos suficientes sobre la existencia de la infracción y así como información de la participación de las personas aprehendidas por miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 529 del COIP pone en conocimiento de la señora Jueza de Garantías Penales de Pichincha –Unidad Judicial con competencia en delitos flagrantes– el caso, para que se realice la Audiencia de Calificación de Flagrancia en atención a que las personas detenidas han sido supuestamente sorprendidas por la Policía Nacional destruyendo bienes ajenos y paralizando servicios públicos, cabe

³⁹ Ecuador, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, art.158

destacar que los abogados defensores de los procesados desde un inicio supieron manifestar que en la mayoría de los casos no se cuenta con una fotografía o video donde se mire a los procesados destruyendo algún bien ajeno por el contrario a muchos de ellos simplemente se los mira caminando o reunidos y nada más, que a la mayoría de los procesados se los detiene al interior del Colegio Mejía por lo que mal podían desde el interior del colegio destruir semáforos, veredas y patrulleros policiales.

[...] si ustedes revisan el proceso en el cuerpo ocho, constan las fotografías pero no indica que ninguno de mis defendidos de los 42 consta que se encontraban destruyendo la propiedad, ni siquiera se ve sus rostros, se ve en algunos que las personas estaban caminando pero no están con el adoquín, piedra o palo, pero los más de treinta policías dijeron que tal es sin ningún fundamento, técnica y a ciegas, de tal manera que eso informes son subjetivas además en el parte policial dijeron que fueron detenidos en el interior del colegio; como ingresaron los policías rompiendo las puertas, allanando el colegio si la propiedad pública queda en la calle Vargas, la propiedad privada queda en la calle Vargas, si los jóvenes fueron detenidos dentro del interior como rompían la luz led del semáforo, los vidrios de la casa de la calle Vargas, es fácil pensar y hacer un análisis, claramente se atenta contra la verdad procesal [...] ⁴⁰

El día 19 de septiembre de 2014 a las 18h00 se da inicio a la audiencia de calificación de flagrancia por la presunta infracción tipificada en el art. 204 num. 1 del COIP que dice:

Daño de bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados. [...]

Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al momento del cometimiento del delito ⁴¹.

Fiscalía solicita se califique la flagrancia y la legalidad de la detención, con la formulación de cargos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 590 y 595 del COIP se da inicio a la etapa de instrucción fiscal, optando la fiscalía por la aplicación

⁴⁰ Ecuador. Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, “Audiencia”, juicio *No 17281-2014-3541*, 14 <<http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf>>

⁴¹ Ecuador, COIP, Art.204.

de un procedimiento especial como lo es el procedimiento directo al tenor de lo dispuesto por el art. 640 num. 2 *ibídem* que dice “procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes”, procedimiento que “concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia” conforme lo establece el art. 640 num. 1 *ibídem*, asimismo el num. 4 del citado artículo señala que “una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia” de esta forma se puede colegir que se trata de un procedimiento ágil y efectivo donde el procesado no tiene que auto incriminarse para negociar la pena con fiscalía, quien al tenor de la norma antes señalada fija en diez días la duración de la instrucción fiscal, solicitando se señale día y hora para la realización de la audiencia de procedimiento directo, señalamiento que la señora Jueza lo hace para el día lunes 29 de septiembre del 2013 a las 07h30.

En audiencia de calificación de flagrancia los procesados a través de sus abogados defensores solicitan a la señora Jueza de Garantías Penales de Pichincha – Unidad Judicial con competencia en delitos flagrantes– Daniela Mayorga Velarde medidas sustitutivas a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía pues la consideran exagerada por tratarse de jóvenes estudiantes, conculcándose sus derechos que están garantizados por la Constitución de la República sosteniendo además los procesados que de conformidad con lo que establece el art. 77 num. 1 y 11 de la Constitución de la República la privación de la libertad no es la regla sino la excepción y que la jueza o juez pueden aplicar medidas cautelares alternativas a la privación de libertad que es de *ultima ratio*.

El art. 522 del COIP determina que “la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad” y el art. 536 *ibídem* determina que “la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en este Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.”, solicitud que es acogida tan sólo a favor de siete personas, a quienes se ordena den cumplimiento a lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal, art. 522 num. 1 y 2, esto es la prohibición de ausentarse del país, para lo cual se ordena ofíciese a las autoridades correspondientes

y la obligación de presentarse periódicamente, cada ocho días, en horas hábiles empezando por el día lunes 22 de septiembre del 2014, ante la fiscalía, ordenándose su inmediata libertad por encontrarse detenidos, violentándose el elemental principio de igualdad alegado por los abogados defensores, respecto de los otros 53 detenidos se dicta la prisión preventiva como medida cautelar por considerar se encuentran cumplidos los requisitos dispuestos por el art. 534 del COIP.

No hay que olvidar que se dicta prisión preventiva por supuestos daños valorados en 3600 dólares y una supuesta paralización de servicios públicos que careció desde un inicio de todo fundamento, sin embargo se detuvieron a 60 estudiantes cuando bien se pudo proceder a la reparación y la adopción de medidas sustitutivas conforme fue solicitado por los abogados de los procesados, lo cierto es que se buscaba con la medida, criminalizar la protesta y sentar un nefasto precedente para que a otros jóvenes en el país, ni si se les ocurra manifestarse en contra de las políticas del gobierno nacional.

Cabe destacar que desde un inicio los procesados a través de sus abogados han alegado “la violación de los derechos constitucionales establecidos en el art. 77 num. 7 letras a, b y c de la Constitución de la República”⁴², que tratan sobre el derecho a la defensa, así como la falta de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en el presente caso, aun cuando se dice:

[...] finalmente en cuanto a que la prisión preventiva es ilegal arbitraria e ilegítima, existe un pronunciamiento de la Sala respectiva de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrad[a] por tres señores Jueces, quienes han conocido la acción de habeas corpus presentada por la gran mayoría de los procesados y han establecido que la referida medida cautelar no es ilegal, arbitraria ni ilegítima.⁴³

El art. 454 del COIP determina los principios que rigen el anuncio y práctica de la prueba, dentro de tales principios se encuentra el de pertinencia que dice “Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada”.

⁴² Ecuador. Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes, con sede en el Cantón Quito, “Sentencia”, juicio *No 17281-2014-3541*, 62
<http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf>

⁴³ *Ibíd.*, 63.

En atención a este principio antes citado, Fiscalía una vez calificada la flagrancia aporta los siguientes elementos de convicción, entre los cuales destacan: 1. Diligencia de identificación personal de los detenidos de conformidad con lo que establece el art. 466 del COIP; 2. Informes de reconocimiento del lugar de los hechos donde se evidencian los daños al interior y exterior del Colegio Mejía; 3. Extracción de la información y cotejo fisonómico de los discos de video anexados tanto de las cámaras de seguridad ECU911, como de los diferentes medios de comunicación social; 4. Recepción de versiones, a testigos y personas procesadas, elementos de prueba respecto de los cuales los procesados en asocio con sus abogados defensores no pudieron objetar una vez admitido el hecho fáctico que se les endilgaba a fin que proceda la aplicación del procedimiento abreviado.

Diferida la audiencia de procedimiento directo a pedido del doctor Javier Bosquez Vilena, fiscal de la causa, contrariándose lo dispuesto en el art. 640 numeral 4 del COIP, la misma se convoca para el día 02 de octubre del 2014. En audiencia de juzgamiento de procedimiento directo llevada a cabo los días 02 y 03 de octubre del año 2014 se solicita la aplicación del procedimiento abreviado, aun cuando el art. 635 num. 2 del COIP determina para este tipo de procedimientos que “la propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”.

De la norma antes referida se desprende con toda claridad que el procedimiento abreviado viene a suplir el ordinario, más no, otro procedimiento especial como lo es el directo, interpretación extensiva y antojadiza que vulnera el debido proceso, cuando tanto el procedimiento abreviado como el procedimiento directo buscan a la larga los mismos objetivos, esto es brindar soluciones rápidas y efectivas al proceso penal con el consecuente ahorro de recursos materiales y humanos, eso sí, en el caso del procedimiento directo sin requerir de la autoincriminación del procesado y la negociación de la pena, con el quebranto de principios procesales básicos del debido proceso como lo son el de contradicción de la prueba y la presunción de inocencia. Además los procesados solicitan caución de conformidad con lo que establecen los artículos 543 al 545 *ibídem* y la suspensión condicional de la pena de conformidad con lo que establece el art. 630 *ibídem*.

La Fiscalía dentro de su alegato y acusación señala que:

El día 18 de septiembre del 2014, el ECU 911, a las 20h00 aproximadamente solicita el apoyo de varias unidades policiales para que acudan al colegio Mejía ubicado en las calles Vargas y Antonio Ante de esta ciudad de Quito, ya que existían un gran número de personas realizando actos violentos ocasionando daños a la propiedad pública como privada, por lo cual acuden los señores oficiales Tte. Marco David Castillo Tapia y Tte. Javier Andrés Lasso Díaz, movilizándose por la magnitud de este hecho 200 personas policías más aproximadamente, al llegar a este lugar, observan que aproximadamente 350 personas estaban en ese momento lanzando palos y piedras las mismas que eran obtenidas destruyendo las losetas de las veredas, (sacando los adoquines y fraccionándoles los mismos) y esos pedazos de adoquines eran lanzados contra los servidores policiales, vehículos y viviendas del sector, algunos de estos objetos llegaron al patrullero policial marca Kia modelo Sportage causándole daños materiales en su estructura, cuando esta patrulla policial pasaba por este lugar, así también daños materiales a dos semáforos de los lugares en las intersecciones, calle Matovelle y calle Vargas, semáforo peatonal calle arena y calle Vargas, de estas intersecciones y al interior del Colegio estaban proveyéndose también de objetos duros por lo que dañaron, puertas, ventanas, cerramientos y protecciones metálicas del colegio Mejía; las 350 personas entre ellas los hoy acusados salían e ingresaban al colegio proveyéndose de estos adoquines, por lo cual se procedió a realizar los respectivos desvíos de vehículos afectando el servicio público de tránsito que se moviliza por este lugar, con la finalidad de precautelar la integridad física de las personas y la destrucción de daños materiales de los vehículos, en ese instante la protesta violenta subió de nivel, razón por la cual aproximadamente en un numero de 200 policías proceden a realizar un operativo que consistía en aprehender a todas las personas identificadas y localizadas que ocasionaban estos daños a estos bienes, públicos como privados por lo que se procede a la aprehensión de los hoy acusados en las afueras del colegio y en su interior a las 22h00. La conducta que la Fiscalía acusa es el daño a bien ajeno tipificada y sancionada en el Art. 204 del COIP. Siendo este un delito con resultado de lesión, afectación a bienes públicos y privados, por lo que la CONDUCTA en esta causa es instantánea se ha probado la destrucción de las veredas, semáforos, patrulla policial e infraestructura del Colegio Mejía [...] Por las circunstancias de este hecho se paralizaron servicios públicos de educación 345 Constitución del Ecuador; 314 la vialidad [...] ⁴⁴

⁴⁴ Ecuador. Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes, con sede en el Cantón Quito, juicio *No 17281-2014-3541*, 34

Con dichos antecedentes la Fiscalía acusa a 54 personas de los 60 procesados; 16 personas en el grado de autores directos de conformidad a lo que determina el art. 42 num. 12 del COIP; y, a 38 personas en el grado de cómplices de conformidad a lo que determina el art. 43 del COIP.

El señor Dr. Javier Bosquez, Fiscal de Pichincha con el acuerdo de los procesados acusados como autores y cómplices, conforme establece el art. 636 del COIP, solicito la aplicación del procedimiento abreviado, pedido que acepto la señora Jueza de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes aceptando instalar en la misma audiencia de procedimiento directo el procedimiento abreviado luego de lo cual se dictó sentencia, misma que es reducida a escrito de conformidad con lo que dispone el art. 621 del COIP con fecha 10 de octubre de 2014.

El señor Dr. Javier Bosquez, Fiscal de la causa, al amparo de lo que establece el Art. 636 del Código Orgánico Integral Penal, en audiencia solicitó un receso a fin de proponer a los señores procesados acusados, la aplicación del procedimiento abreviado en presencia de los señores Abogados que ejercían la defensa de los mismos acordando la calificación jurídica del hecho punible y ofreciendo la pena privativa de libertad de 4 meses para los autores y 2 meses para los cómplices; ofrecimiento ante el cual los señores Abogados de la defensa procedieron a explicarle a sus defendidos en qué consiste el procedimiento abreviado y las consecuencias que el referido procedimiento acarrea a las personas que deciden someterse al mismo. Así mismo la señora Jueza de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes en audiencia verificó preguntando en forma individualizada a cada uno de los procesados si consienten en forma libre y voluntaria la aplicación del procedimiento abreviado, si están de acuerdo y aceptan los hechos que les atribuye la Fiscalía, quienes a viva voz indicaron que sí, que consienten la aplicación de dicho procedimiento y que aceptan en forma libre y voluntaria los hechos atribuidos por el señor Fiscal; en virtud de lo cual y en cumplimiento de los principios de inmediación, concentración, dispositivo y economía procesal, con la aceptación libre y voluntaria de los mencionados procesados la señora Jueza declaró instalada la audiencia de procedimiento abreviado y en la misma volvió a preguntarles en forma individualizada si estaban de acuerdo, quienes luego de haber sido asesorados de sus derechos y de las consecuencias jurídicas a viva voz indicaron que si consienten la aplicación del procedimiento abreviado, que lo hacen en forma

libre y voluntaria y admiten los hechos atribuidos por fiscalía en la calidad que este les ha indicado.⁴⁵

Es así que en audiencia de juzgamiento una vez realizada la acusación en contra de las personas procesadas, estas se someten al procedimiento abreviado de conformidad con lo que establecen los artículos 635 al 639 del COIP, siendo la aplicación de este procedimiento libre y voluntaria las personas procesadas admitieron el hecho que se les atribuía, como es el de haber ocasionado daños a los bienes ajenos la noche del 18 de septiembre del año 2014 al interior e inmediaciones del Colegio Mejía.

En audiencia de procedimiento abreviado el señor Representante de la Fiscalía General del Estado, Dr. Javier Bosquez, ha indicado que:

Con los elementos recopilados en la etapa de instrucción fiscal, tales como el Informe de Inspección Ocular Técnica y avalúo de daños No. 991-2014, de fecha 19 de septiembre del año 2014, realizado por el Ab. Diego Guerra Santana y Tte. Denise Alejandra Troya Aguilar, que consta los daños en los semáforos calle Matovelle y calle Vargas, las losetas de las acera ubicado en la calle Antonio Ante y Vargas; Led del semáforo peatonal ubicado en la intersección de la calle Arenas y calle Vargas; Patrulla policial con varios daños, un avalúo aproximado 3477; Informe No. 1032-2014 de extracción de audio y video de los videos de las cámaras de seguridad Ecu-911, practicado por los señores Sgos. LAMAR SALAZAR FRANCISCO donde se observa en estas intersecciones tomada por varias personas y con varios objetos similares a adoquines dispersos en estos sectores; Informe No. 006-2014, de Reconocimiento del Lugar de los hechos y daños de viviendas del sector, practicado el 22 de septiembre del año 2014 practicado por el señor William Muzo Conchambay, se observa daños a las viviendas del sector, especialmente rotura de vidrios; Informe de Reconocimiento del Lugar de los hechos practicado por los señores Edison Rodríguez Villamarín y Walter Quimbíta Terán, de los daños a las instalaciones al Colegio Mejía; Certificación de la patrulla policial que fue golpeada y se causó daños materiales el día de los hechos asignada a la Dirección General de Logística; Informe técnico de daños de la infraestructura ocasionados en el Colegio Mejía, realizado por el Arq. Juan Pancho Polo; Certificación emitido por la Subdirección de Educación que el Colegio Mejía es de sostenimiento Fiscal y depende del Ministerio de Educación; y que por la naturaleza

⁴⁵ Ecuador. Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes, con sede en el Cantón Quito, Sentencia, juicio *No 17281-2014-3541*, 9

del procedimiento abreviado se convierten en prueba, llegándose a determinar la existencia de la infracción de daño a bien ajeno, tipificado y sancionado en el Art. 204 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal; así como la participación de los procesados 1.Tumipamba Samaniego Jefferson Antonio; 2. Caizaguano Camacho José Luis; 3. Caizaguano Camacho Steven David; 4.Pinzón Salazar Patrick David; 5.Navarrete Pérez Oscar Ricardo 6.Acaro Cañar Alejandro Manuel; 7.Beltran Portero Alain Daniel; 8.Bravo Macay Raúl Andrés; 9.Cabrera Cruz Mauricio Geovanny; 10.Durán Suárez Alexander Franklin; 11.Fuertes Guerra Pablo Daniel; 12.Mendoza Domínguez Nixon Darío; 13.Navarrete Gia David Alexander; 14.Noboa Benites Francisco Javier; 15.Tapa Pallo Cristian Paul; 16.Vásquez Pillalasa Marlon Andrés en calidad de autores directos, conforme lo prescribe el artículo 42 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal; y de los procesados 1.Chalcualan Mendoza Wilber Abraham; 2.Martínez Recalde Josué Sebastián; 3.Reina Toapanta Guillermo Daniel; 4.Reyes Paladines David Alejandro; 5.López Riofrío Carlos Alberto; 6.Sangoquiza William Hernan; 7.Aguilar Cifuentes Diego Jefferson; 8.Altamirano Venegas Kevin David; 9.Pozo Ortega Pablo Fernando; 10.Imba Salazar Christian Stalin; 11.Flores Álvaro Christian Danilo; 12.Bolagar Aynuca Alexis Fabián; 12.Bailón Acosta José Luis; 13.Padilla Quinga Nelson Vinicio; 14.Méndez Méndez Kevin Javier; 15.Rueda Mejía Jefferson Darío; 16.Saquipay Yunga Edison Javier; 17.Simbaña Rea David Alejandro; 18.Marmol Trujillo Brando Jorge; 19.Pazmiño Sánchez Andrés Sebastián; 20.Dávila García Carlos Andrés; 21.Cadena Sampedro Carlos Luis; 22.Carrión Murillo Esteben Eduardo, 23.Chasi Jácome Juan Carlos; 24.Claudio Chasi Nelson David; 25.Matehu Cusme Guillermo Andrés; 26.Remache Chipantiza Edison Raúl; 27.Ortega Tituaña Jefferson David; 28.Quispe Cumbal Luis Israel; 29.Remache Villagómez Cristian David; 30.Paredes Sánchez Ronald Stalin; 31.Heredia Llimiquinga Galo Andrés; 32.Panchi Vilaña Diego Alexander; 33.Panchi Vilaña Diego Alexander; 34. Ticcicuro Pilataxi Luis Diego; 35. Sanmartín Ajila Diego Roberto; 36.Ortiz Velázquez Pablo Sebastián; 37.Pinza Reyes Bryan Omar; y, 38.Montero Sánchez Lenin Paul; en calidad de cómplices, con fundamento en lo que preceptúa el Art. 43 de Código Orgánico Integral Penal; solicitando una pena privativa de libertad de 4 meses y la respectiva multa para los autores y 2 meses y multa para los cómplices; y como reparación integral \$60,00 y así mismo solicitó se suspenda la pena a los sentenciados en calidad de cómplices sugiriendo las condiciones establecidas en el Art. 631 numerales 5 o 6, 7 y 9 del Código Orgánico Integral Penal, el numeral 9 por el plazo de 2 años contados a partir de la fecha en que se dio inicio la audiencia, esto es el 02 de octubre del 2014.⁴⁶

⁴⁶Ibíd., 10.

Por su parte los señores Abogados de la defensa de cada uno de los procesados acreditaron las atenuantes que constan de autos por un lado y por otro a su vez solicitaron la suspensión de la pena de sus defendidos, unos en la misma audiencia de procedimiento abreviado, otros durante las 24 horas posteriores a la misma, indicando en lo esencial que se encuentran reunidos los requisitos del Art. 630 del COIP y acreditando documentadamente los antecedentes personales, sociales y familiares de los sentenciados, petición que fue aceptada favorablemente por la señora Jueza en cuanto a los procesados sentenciados en calidad de cómplices, tomando en consideración la calidad en la que se había determinado su participación en los hechos criminosos acusados por Fiscalía y aceptada en forma libre y voluntaria por los sentenciados.

Respecto del procedimiento abreviado es importante destacar lo que Dentro de la sentencia la señora Jueza señala:

La naturaleza del procedimiento abreviado se basa en una pena negociada entre el Fiscal y el procesado, que el Fiscal aplicando las atenuantes, ofrece el mínimo de la pena establecida para el delito investigado reducido hasta un tercio y que el procesado una vez que ha sido asesorado por su Abogado defensor y explicado de sus consecuencias, en forma libre y voluntaria debe consentir la aplicación de dicho procedimiento y aceptar el hecho atribuido por fiscalía. En relación a este procedimiento especial contemplado en el Código Órgano Integral Penal, es necesario señalar que es una negociación que la constitución y la ley les permite acceder a las partes procesales, ofreciéndoles beneficios mutuos, por un lado el procesado se beneficia de todas las rebajas que establece la ley, que se evita estar en la incertidumbre de la pena que se fijará luego de la sustanciación del juicio bajo el procedimiento ordinario, en este caso bajo el procedimiento directo, ahorra recursos económicos sobre gastos de defensa y en general gastos judiciales durante la tramitación de todas las etapas del proceso, que en el procedimiento ordinario, para el caso que se demuestre la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, la pena establecida es otra totalmente diferente; en cambio la Fiscalía, aplicando los principios de economía procesal y celeridad, se evita el desgaste procesal y ahorra tiempo y recursos.⁴⁷

Los cierto es que la negociación de la pena a la que se refiere la señora jueza se lleva a cabo cuando la mayoría de los estudiante detenidos el 18 de septiembre del

⁴⁷ *Ibíd.*, 11.

2014 aún se encuentran privados de su libertad viéndose avocados a decir lo que sea por recobrarla, más aún cuando no que existan fundamentos de peso para que se haya detenido a 60 estudiantes por daños valorados en 3600 dólares que prorrateados dan la cuantiosa suma de 60 dólares, por otra parte no quedan claros los beneficios ni la norma legal que sustente la adopción del procedimiento especial abreviado dentro de otro procedimiento especial como lo es el directo, cuando ambos se miran como alternativas frente a un tipo de procedimiento, el ordinario; y, lo grave de esto, son las consecuencias que implican el someterse a un procedimiento abreviado no en relación a la bondadosa rebaja de pena una vez acordada la calificación jurídica del hecho punible cuyo sustento de prueba resulta inobjetable sino a la vulneración de principios y derechos constitucionalmente consagrados.

Señalando además la señora Jueza que:

Todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar y expresar nuestro pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, así lo establece el Art. 66 numeral 6 de la Constitución de la República, incluso garantiza el derecho a la resistencia, así lo preceptúa el Art. 98 de la Carta Magna, que textualmente dice: "...Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos..."; esto es, existe el derecho de opinar y expresar nuestros desacuerdos con el régimen, con las resoluciones de los poderes públicos, o de las personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar nuestros derechos constitucionales; podemos exteriorizar nuestro pensamiento y presentar propuestas, proyectos, sugerir soluciones, dar ideas propositivas en bienestar de todos los habitantes del país; salir a las manifestaciones pacíficas y ser escuchados siempre y cuando respetemos los derechos de los demás ciudadanos, observando y cumpliendo las normas jurídicas que rigen el comportamiento humano dentro de una sociedad con el único fin de conservar el orden social; podemos ser escuchados por los diferentes medios respetando el honor y la dignidad de sus semejantes; respetando el derecho a una vida libre de violencia, respetando la propiedad ajena; sin causar daños ni desmanes a los servicios públicos creados para satisfacer necesidades primordiales de los ciudadanos, como es la educación, el transporte, la viabilidad⁴⁸.

⁴⁸ Ibíd., 12.

Argumento que se comparte siempre y cuando se dé cumplimiento a lo que consagra la Constitución de la República en su art. 76 num. 6 que dice “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”, principio de proporcionalidad que no se aplicó en el presente caso cuando se detienen a 60 jóvenes estudiantes de un colegio por manifestarse en contra del gobierno nacional bajo el cargo de daño a bienes ajenos y una supuesta paralización de servicios públicos que ni si quiera fue sostenida o debidamente argumentada por la señora Jueza.

La jueza sentenció por tal efecto, como medida cautelar dictó prisión preventiva en contra de la mayoría los procesados cuando bien se pudo dictar medidas sustitutivas las cuales beneficiaron a un reducido número de privilegiados, en igual sentido se resolvió respecto de la solicitud de la suspensión condicional de la pena, todo esto tomando en consideración el exiguo daño valorado en 3600 dólares que no ameritada se actúe de esta manera por parte del órgano jurisdicción, siempre y cuando se actúa con imparcialidad y que respecto de todos los sentenciados se cumplía los requerimientos dispuestos por el art. 630 que trata sobre la suspensión condicional de la pena.

En sentencia la resolución de la señora Jueza de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, acogiendo la acusación fiscal, ratifica el estado de inocencia respecto de 6 procesados, condenando en calidad de autores directos a 16 personas imponiéndoles la pena de dos meses de privación de libertad y en calidad de cómplices a 38 personas imponiéndoles pena privativa de libertad de un mes, a quienes tomando en consideración lo solicitado por sus abogados defensores se les aplica la suspensión condicional de la pena, con lo que dice estar de acuerdo el señor fiscal, disponiendo la señora Jueza que cumplan con lo establecido en el art. 631 numerales 5 o 6, 7 y 9, en virtud de ello se ordena su inmediata libertad de conformidad con lo establecido en el art. 77 num. 10 de la Constitución de la República y el art. 619 num. 5 del COIP. De los autos se encuentran las certificaciones del señor Tumipamba Samaniego Jefferson Antonio, quien justifica que sufre una enfermedad catastrófica, no existiendo oposición de la fiscalía la señor Jueza suspende la pena del procesado imponiéndole lo determinado en el art. 631 numerales 5, 7 y 9 del COIP.

Los procesados dentro del término que les concede la ley interponen recurso de apelación de la sentencia dictada con fecha 12 de octubre del 2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 653 y 654 num. 1 del COIP se concede

el recurso interpuesto y se dispone se remita el proceso a la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para el trámite legal pertinente.

Con fecha 07 de noviembre del año 2014, a las 16h30 se lleva a cabo la audiencia de apelación, de la sentencia emitida por la señora Jueza de Garantías Penales de Pichincha, en donde la defensa de las personas sentenciadas argumentan la violación de varios principios y derechos consagrados legal y constitucionalmente entre los cuales destacan el derecho a la defensa, el *in dubio pro reo*, el de imparcialidad, el derecho de igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, etc.

El doctor Julio César Sarango sostiene que los jóvenes al someterse “al procedimiento abreviado, han aceptado los hechos fácticos, pero eso no quiere decir que se acepte la responsabilidad eso lo tiene que ver los Jueces en base a la sana crítica en base al convencimiento de las pruebas aportadas no es una cosa de que si se aceptó el procedimiento abreviado ya sea responsable, aceptamos los hechos fácticos que si sucedieron pero no que nosotros participamos en ello”⁴⁹, sin embargo, no hay que olvidar que bajo lo norma penal vigente dentro del procedimiento abreviado una vez admitido el hecho fáctico y consentir en la aplicación de dicho procedimiento, el juez de garantías penales puede tan sólo dictar sentencia condenatorio pues la de absolución o ratificación de inocencia bajo el régimen procesal penal vigente ya no cabe.

En apelación la Corte Provincial de Pichincha determina que “el tipo penal al que se adecuó la conducta es el que se subsume en el Art.204, no en el 204.1, sino en el 204 que se refiere daño a bien ajeno”, sosteniendo que:

La Fiscalía en su exposición, de los recaudos procesales y del análisis de las categorías dogmáticas, no se llega a establecer con certeza, qué servicios públicos han sido paralizados, entendiéndose por servicios públicos al suministro de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, cuyo manejo corresponde a los Municipios, en la especie, al Distrito Metropolitano de Quito, entidad pública que del proceso no consta haber informado sobre la paralización de esos servicios públicos provocados por los procesados. Lo que se ha probado con testimonios y pericias, es la infracción que ha consistido en dañar bienes ajenos, que prevé y sanciona la norma contenida en el artículo 204 del COIP, la que merece la pena de dos a seis meses de privación de

⁴⁹ Ecuador. Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, 16

libertad, aunque al inicio Fiscalía ha tenido información relevante respecto a la presunta paralización ésta no se ha llegado a establecer.⁵⁰

En este sentido cabe recordar que la aplicación del procedimiento abreviado determinó el “acuerdo” entre la fiscalía y los procesados respecto de la calificación jurídica del hecho punible, misma que en el presente caso fue errónea y obviamente en perjuicio de la parte más débil del acuerdo que es el procesado, esto para la autora se muestra relevante en el sentido que el daño de bien ajeno sin agravantes contempla una pena entre dos a seis meses, mientras que el mismo daño con agravantes recordando que fiscalía desde un inicio esgrimió como agravante la paralización de servicios públicos misma que jamás fue debidamente sustentada aun cuando la jueza de primera instancia la avaló, contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Esto sin duda ejerce presión en al procesado quien se ve abocado a consentir en la “bondad” del supuesto acuerdo aun cuando vea conculcados sus derechos constitucionales frente a la amenaza de imposición de una pena mucho mayor. Cabe destacar también lo argumentado por el doctor Javier Bosquez Villena en el sentido de que dice que “en un proceso abreviado las personas renuncian a su estatus jurídico de inocencia, es ahí que el Estado con los operadores de justicia dan paso a un ahorro procesal, que beneficie a las partes, beneficio relacionado con las atenuantes establecidas en el Art. 45 que se cumplió”⁵¹, es decir, para la fiscalía con la admisión del hecho fáctico el procesado se declara culpable y por tanto responsable penalmente, lo cual resulta inaceptable pues aun cuando exista tal admisión de los hechos el juez está en la obligación de adecuarlo a los elementos de convicción que en audiencia se transforman en prueba, y sino no se adecuan, no estando facultado para dictar sentencia absolutoria o de ratificación de la inocencia deberá proceder conforme lo estipula el art. 639 del COIP que dice:

Si la o el juzgador considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e

⁵⁰ Ecuador. Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, “Sentencia”, en juicio *No 17281-2014-3541*, 11 <http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf>

⁵¹ *Ibíd.*, 6.

instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario.⁵²

Respecto de la argumentación de la fiscalía antes señalada el doctor Julio César Sarango sostiene acertadamente a criterio de la autora que:

Conforme al Art. 635 numeral 3 del COIP los jóvenes se han sometido al procedimiento abreviado, han aceptado los hechos fácticos, pero no se acepta la responsabilidad, eso tiene que ver los Jueces en base a la sana crítica, en base al convencimiento de las pruebas aportadas. El Art. 636 es una forma de arreglo entre la Fiscalía y procesado, la jueza debió revisar concretamente los hechos y ser coherente con el derecho para aplicar su fallo o condena; no aceptamos la culpabilidad porque rompe el principio de inocencia establecido en el Art. 76 numeral 2 de la CRE, además está prohibido por la Constitución, la Ley y Tratados Internacionales. Para fallar condenando debe observarse el debido proceso, que las pruebas se obtenga de manera legal no arbitraria, esa es la parte importante que debe aplicar; la Constitución está por encima de cualquier norma, tratándose de derechos humanos. No estamos conformes con la condena, no es posible que por 3600 dólares se aprese a 6[0] jóvenes, se hubiera llegado a una reparación, no hay reclamos. Esto es acallar la voz de una juventud que piensa diferente.⁵³

Solicitando la defensa de los recurrentes la rebaja de la pena, de 60 días de prisión a 49 días, esta petición fue aceptada por la Fiscalía y acogida por los señores Jueces de la Corte Provincial de Pichincha, resolviendo en ese momento dar por cumplida la pena de las personas sentenciadas, disponiendo su inmediata libertad, en lo que respecta a las personas que estaban cumpliendo la suspensión condicional de la pena, se resolvió también declarar cumplidas las condiciones impuestas.

De la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha al amparo del art. 657 num. 1 del COIP, los procesados el 02 de diciembre del 2014 interponen recurso de casación, resolviendo la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia el 12 de enero del año 2016 inadmitir el recurso por cuanto el mismo “no se encuentra debidamente

⁵² COIP, Art.639

⁵³ Ecuador. Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, “Sentencia”, en juicio *No 17281-2014-3541*, 6-7.

presentado, no obstante de ser oportuno, no especifica con precisión los fundamentos legales en los cuales cimienta su inconformidad con la sentencia recurrida”⁵⁴ por lo que regresa a la Corte Provincial y se sienta la razón de ejecutoria el 07 de junio del año 2016⁵⁵.

Bajo la normativa legal vigente, para que proceda la aplicación del procedimiento abreviado el Código Orgánico Integral Penal requiere de la persona procesada que este admita el hecho que se le imputa, de esta forma se inculpa vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia haciéndose beneficiario a la aplicación de una pena mínima so pena de hacerse merecedor de una pena mayor de darse una sentencia condenatoria en juicio ordinario.

La aplicación del procedimiento abreviado tal cual se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal no brinda las garantías necesarias de defensa a la persona procesada, cuando dentro de la tramitación de dicho procedimiento no se cumple con principios básicos que forman parte de dicho derecho, cuando resulta inoficioso la evacuación de nuevos elementos probatorios a su favor así como de la contradicción de aquellos presentados en su contra.

⁵⁴ Ecuador. Corte Nacional de Justicia, “Resolución Inadmisión”, *juicio No 17721-2014-1914*, 10 <http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/consulta-de-causas>

⁵⁵ Ecuador. Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, “Razón ejecutoria”, en *juicio No 17281-2014-3541*, 3.

Capítulo tercero

Propuesta de reforma normativa al COIP sobre Procedimiento Abreviado

En el presente capítulo, teniendo como base la aproximación conceptual sobre procedimiento abreviado planteada en el capítulo primero y el análisis de la aplicación que esta figura tuvo en el caso concreto de los estudiantes del Colegio Mejía, se desarrolla una propuesta de reforma normativa a este procedimiento, como mecanismo para precautelar el derecho al debido proceso y en particular el derecho humano a la presunción de inocencia.

Para viabilizar esta propuesta se realiza un análisis de contexto y se precisan las fortalezas, oportunidades, debilidades y posibles amenazas. En base a ello se propone un proceso de incidencia estratégica desde las dimensiones social y política. La propuesta de reforma se ha elaborado en base al esquema contemplado por la técnica legislativa para la presentación de proyectos de reforma legal, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, consta exposición de motivos, considerandos y la reforma normativa, misma que asume la necesidad de incorporar a la normativa penal un enfoque de derechos humanos y principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y presunción de inocencia.

3.1.Propuesta de reforma al COIP

A la luz del enfoque de derechos humanos y la visión garantista del Derecho Penal en este capítulo se desarrolla una propuesta para la reforma a la regulación del procedimiento abreviado previsto en el COIP.

La propuesta asume el esquema contemplado por la técnica legislativa de presentación de proyectos de reforma legal, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, que comprende tres aspectos: exposición de motivos, considerandos y la reforma normativa.

3.1.1. Exposición de motivos

El ordenamiento jurídico debe garantizar la integridad y supremacía de la Constitución de la República de Ecuador, así como la efectiva aplicación de los

principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima en los administradores de justicia.

En la legislación penal existen figuras jurídicas que se las usan de manera indiscriminada, fomentando los efectos del poder punitivo y las sentencias condenatorias, lo cual contraviene al Estado de Derechos y Justicia.

Al ser una obligación del Estado adecuar las normas nacionales con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, se eliminan las medidas restrictivas de derechos en el ámbito judicial, pues constituyen una amenaza a la seguridad ciudadana, a la convivencia pacífica y a la institucionalidad del Estado.

Las presunciones constituyen una opción que tiene el Derecho para solucionar los casos en los que tienen duda en un determinado caso con la aplicación de cierta norma jurídica, estas operan en los casos que el juez no tiene elementos suficientes para creer en la verdad o falsedad de determinada posición fáctica y resolver el caso, las presunciones facilitan la toma de decisiones en casos de duda, favoreciendo por anticipado cierta respuesta, la misma que, en un estado garantista, debe inclinarse siempre en favor de los derechos humanos.

La pena traducida en encierro como un castigo no puede ni debe ser un ejercicio ligero de la Función Judicial, sino el resultado de una estricta revisión del tipo penal y los elementos de cargo y descargo con los que se cuente en el caso en concreto.

En el año 2010, se produjo un giro en materia penal con la aprobación del COIP, sin embargo la reforma fue insuficiente al alinearse únicamente al eficientismo penal. Una de las figuras que la reforma incorporó fue el procedimiento abreviado, que presenta una dificultad al momento de relacionar el nexo entre el daño causado por el delito y la culpabilidad del infractor, sin poder establecer sus límites.

Para acceder al procedimiento abreviado, el COIP (el art. 635 num. 3), exige como requisito que la persona procesada consienta expresamente en la admisión del hecho que se le atribuye, lo cual podría ser obviado, pues la aplicación del procedimiento se basa en la celeridad y simplicidad de lo que se quiere juzgar, sin que sea necesaria la confesión del delito por parte del imputado. Es de entender que al expresarse su voluntad la persona procesada en la aplicación de este procedimiento y evitar el debate en la audiencia se obtendría exactamente los mismos resultados.

El artículo en mención padece de algunos vacíos legales que perjudican la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso, así por ejemplo no se establece

una opción en la que se dicte auto de sobreseimiento o ratifique el estado de inocencia del o los procesados vulnerando el principio de presunción de inocencia.

Además, el art. 637 del COIP establece que si el procedimiento es aceptado, se dictará la sentencia condenatoria, sin embargo debe realizarse por parte del juez un análisis profundo del grado de participación del presunto sospechoso, así como de los elementos de convicción presentados, en el caso de no ser suficientes no se debe coartar los derechos del procesado y sometérselo a un procedimiento ordinario, debe primar su derecho a la presunción de inocencia y en este sentido se debe dictar sentencia absolutoria sin más trámite.

Si bien la finalidad del procedimiento abreviado es servir como un elemento para que el sistema judicial sea ágil y rápido, se debe establecer un mecanismo idóneo que permita coadyuvar estándares de derecho penal como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la prohibición de no autoincriminación, que las pruebas sean obtenidas legítimamente y que asegure además el respeto de todos los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Se está mal entendiendo en algunos casos la aceptación del hecho fáctico, pues esta aceptación no reemplaza la obligación que tiene Fiscalía de probar el grado de participación del presunto sospechoso. Una vez calificada la flagrancia e iniciado el proceso de sustanciación de la causa, la Fiscalía debe aportar elementos de convicción que se constituirán en prueba; sin embargo en la actualidad las personas procesadas, en asocio con sus abogados/as defensores, no pueden objetar la prueba una vez admitido el hecho fáctico que se les endilgaba a fin que proceda la aplicación del procedimiento abreviado.

Existen países como España, donde el procedimiento abreviado más que un procedimiento especial se configura como un procedimiento ordinario con características especiales, es así que no contempla las características que muestra dicho procedimiento en el Ecuador y en otras legislaciones donde la admisión de culpabilidad es requisito indispensable para su procedencia, y se instituye en una verdadera alternativa para el procesado a la que puede acogerse.

Los parámetros que regula la ley de enjuiciamiento criminal al procedimiento abreviado en España, tutelan los derechos en forma efectiva al no tener como fundamento una admisión de culpabilidad por parte del acusado y que si bien se pueden

darse dentro de un procedimiento abreviado no lo configuran en su esencia, siendo este un referente adicional que refuerza la propuesta de reforma de la normativa nacional.

Así, el procedimiento abreviado se ha posicionado como un mecanismo para evacuar causas, lo cual hasta puede hacer suponer una justicia más ágil, puesto que ha incrementado el número de sentencias condenatorias, pero dicho procedimiento da mayor posibilidad a que se vulnere el derecho humano a la presunción de inocencia de los acusados y esto induce a que se distorsione el rol garantista de los operadores de justicia.

Ante esto, es necesario que se regule de mejor manera el procedimiento abreviado, con la finalidad que no se vulnere ningún derecho de la persona procesada y que se evacúe las pruebas necesarias para la imputación del hecho.

Bajo las razones expuestas se plantea reformar los arts. 635 y 639 del COIP, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:

- Garantizar el derecho a la presunción de inocencia y el efectivo ejercicio de los derechos del debido proceso.
- Incluir como requisito para la aplicación del procedimiento abreviado, que el juez verifique la pertinencia de los elementos de convicción aportados y que en el caso de no ser suficientes se le otorgue la facultad de ratificar la inocencia del presunto infractor.
- Eliminar condiciones innecesarias e inadmisibles de naturaleza jurídica, pues no tiene sentido que sea un requisito fundamental la admisión del hecho por parte del procesado para la aplicación del procedimiento abreviado.

De la forma en la que actualmente se está aplicando el procedimiento abreviado se afecta varios derechos, primordialmente el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia, a la no autoincriminación y al debido proceso, por este motivo se propone una reforma normativa que dé respuesta a esta problemática y permita proteger y tutelar los derechos humanos de las personas procesadas que eventualmente puede acogerse a este procedimiento, actualmente las discusiones sobre reformas legales únicamente se refieren a la técnica jurídica y la sanción penal que debe imponerse. Pero estas también deben centrarse en los derechos humanos y si es adecuado que sobre la mera aceptación de un hecho se criminalice a determinados grupos, el sistema penal debe mejorar paulatinamente hasta que el sistema pueda proteger derechos y no contemplar únicamente sanciones penales.

Esta propuesta asume la necesidad de incorporar a la normativa penal un enfoque de derechos humanos, que dé cuenta de los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y presunción de inocencia; enfoque que se debe aplicar para realizar una interpretación más favorable de los derechos, ya que en definitiva las violaciones a los derechos del debido proceso ocurren en el contexto que el Estado implementa un nuevo sistema procesal penal, el mismo que mantiene conductas discriminatorias sin realizar la conexidad que corresponde con los principios antes mencionados.

La adopción de este enfoque permite garantizar que la persona sea asumida como sujeto de derechos, el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías consagrados tanto en la constitución como en instrumentos internacionales de derechos humanos, la tutela efectiva de los derechos a través del acceso efectivo a la justicia, la rendición de cuentas y la participación social activa en la toma de decisiones relacionadas a la creación y reforma de leyes penales.

3.1.2. Considerandos

Que, el art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra que los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social;

Que el art. 8, num. 2, lit. g., de esta misma convención establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; y consagra el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;

Que el art. 14, num. 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos especifica que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; y en el lit. g) determina que toda persona acusada en un delito tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable;

Que la Observación General Nro. 13 del Comité de Derechos Humanos, en el párr. 7 señala que en virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae

sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. Por lo que no puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.

Que, el art. 1 de la Constitución de la República proclama al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia;

Que, el art. 84 de esta misma norma jurídica dispone que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que seas necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

Que, el art. 134, num. 5 de la Constitución de la República se refiere a la iniciativa para presentar proyectos de ley, esta corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional;

Que, el num. 6 del art. 134 de la Constitución de la República establece que quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados;

Que, el num. 2 del art. 76 de la Constitución de la República establece que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su culpabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada;

Que, el num. 7, lit. c del art. 77 de la Constitución de la República refiere que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal;

Que, el num. 3 del art. 5 del COIP en cuanto a la duda a favor del reo establece que la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable;

Que, el num. 4 del art. 5 del COIP estipula que toda persona mantiene su estatus de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutorie una sentencia que determine lo contrario;

Que, el num. 5 del art. 454 del COIP señala que las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada.

Que, el num. 3 del art. 635 del COIP exige como requisito para acceder al procedimiento abreviado que la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye;

Que el art. 637 del COIP en su parte final determina que sin excepción alguna si es aceptado, se instalará la audiencia inmediatamente y dictará la sentencia condenatoria.

3.1.3. Reforma expresa sobre procedimiento abreviado

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 635 numeral 3 del COIP, por el siguiente:

La persona procesada deberá consentir expresamente en la aplicación de este procedimiento.

Artículo 2.- Inclúyase después del artículo 639 un artículo innumerado con el siguiente texto:

En el caso que los elementos en los que la o el fiscal ha fundado su investigación no son suficientes para presumir participación de la persona procesada en el hecho que se le atribuye, el juzgador deberá emitir auto de sobreseimiento respetando garantías jurídicas universales y constitucionales.

3.2 Incidencia estratégica para viabilizar el proyecto

A continuación se expone un proceso de incidencia estratégica encaminado a viabilizar el proyecto de reforma normativa planteado. Se parte para ello de una ubicación del contexto existente, se realiza un análisis FODA y luego se desarrollan los principales alcances de las estrategias social y política.

3.2.1. Ubicación de contexto

De acuerdo a Vanesa Aguirre “la administración de justicia es una tarea *compleja* que requiere principalmente de un fuerte nivel de compromiso de parte de

sus actores”⁵⁶. Y esta misma autora agrega que a pesar de los esfuerzos del Consejo de la Judicatura, sigue habiendo exceso de causas, por lo que satisfacer las ansias de justicia de la población no es, de ninguna manera una tarea fácil.⁵⁷

Ecuador se encuentra en un proceso de consolidación de un sistema de administración de justicia penal, orientado a la instauración del modelo acusatorio. En 2011, mediante consulta popular se situó a la administración de justicia penal como un tema central de intervención pública, esto debido a que dentro del combate a la delincuencia “se atribuyó la responsabilidad del problema al aparato judicial”⁵⁸, indicando además que “[u]na justicia incapaz de sancionar a los reos de manera eficaz es un incentivo a la reiteración del delito”⁵⁹, teniendo en cuenta que a lo largo de la realidad nacional “el Ejecutivo, de varias maneras, ha mantenido injerencia sobre la Función Judicial”⁶⁰.

Este proceso de transformación encontró en la adopción del COIP el marco ideal para promover los cambios sustantivos y procedimentales que se necesitaban para aterrizar los principios establecidos en la Constitución, así como procedimiento especiales tal como el caso del procedimiento abreviado. El COIP entró en vigencia en el 10 de agosto del año 2014, pocos días después de la vigencia del nuevo código Fiscalía refiere “la Fiscalía del Guayas logró obtener 44 sentencias mediante la aplicación del procedimiento directo. [...] Los 44 fallos representan el 51% de los causas tramitadas (86) durante este período”.⁶¹

Dicha dinámica se ha mantenido a través de los años, en el mes de octubre del 2017 el Consejo de la Judicatura “presentó los resultados de la auditoría a los casos judiciales resueltos mediante el procedimiento directo en las Unidades de Flagrancia de provincia del Guayas. [...] Según informó Néstor Arbito, vocal del Consejo, entre enero y septiembre del 2017 hubo 3 092 juicios por delitos flagrantes que concluyeron

⁵⁶ Vanesa Aguirre. “La administración de justicia en Ecuador 2012”. En Gina Benavides Llerena y Gardenia Chávez Núñez, edit, *Horizontes de los Derechos Humanos. Ecuador 2012* (Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2013) 24

⁵⁷ *Ibíd.*, 12

⁵⁸ Luis Pásara, *Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana: Resumen ejecutivo* (Lima: Fundación del debido proceso, 2014), 67

⁵⁹ *Ibíd.*, 67

⁶⁰ Jaime Veintimilla y Gabriela Vallacis, “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Informe Ecuador”, en *Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú*. (Washington: Due Process of Law Foundation, 2013), 114.

⁶¹ Ecuador. Fiscalía General del Estado. “Fiscalía logra 44 sentencias en primeros casos de procedimiento directo”, <https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-logra-44-sentencias-en-primeros-casos-de-procedimiento-directo/>

mediante el procedimiento directo”⁶², si bien no existen estadísticas oficiales del total de causas resueltas con dicho procedimiento en los últimos años, el Consejo de la Judicatura entre otros organismos consideran que con el procedimiento directo se agiliza el proceso penal y tiene amplia acogida entre los delitos flagrantes.

Hecho que ha incidido en el aumento de la población carcelaria, María Paula Romo ha manifestado que “en los últimos años se ha cuadruplicado la población carcelaria, pasamos en 7 o 6 años de más o menos 11 mil personas privadas de libertad a 40 mil personas”⁶³, sin embargo todos los días con la aplicación del procedimiento abreviado se dictan más sentencias condenatorias y por lo tanto aumenta aún más la población carcelaria por lo que existe una situación de hacinamiento en los centros de rehabilitación social.

Durante el gobierno del Ec. Rafael Correa (2007-2017), el país enfrentó una etapa de judicialización de la protesta social, a través de la utilización de figuras penales como sabotaje, terrorismo, daños a bienes privados y otros, además se empleó a policía como medio de represión; se limitó la libertad de expresión de los periodistas a través de diferentes formas de control previstas en la una ley de comunicación muy restrictiva; y se coartó la independencia judicial, pues jueces y fiscales que no se alineaban al régimen fueron destituidos bajo la figura de error inexcusable.

Actualmente, el presidente licenciado Lenin Moreno ha abandonado las prácticas de su antecesor, se ha dado un giro radical desde que asumió el gobierno, en este momento se ha fomentado una política de diálogo con todos los sectores, se procura la lucha contra la corrupción y se ha mejorado la correlación con medios de comunicación; hasta el momento ha disminuido aquella practica anterior de confrontación permanente. Actualmente existe un rol pacificador por parte del Estado, no se reprime las protestas, tampoco se ha criminalizado las mismas, se dejó atrás el autoritarismo.

Desde el Consejo de la Judicatura Transitorio se trata de implementar mecanismos que permitan tanto a jueces y fiscales actuar contando con una verdadera independencia judicial. Para ello, el 21 de agosto de 2018, implementa la Mesa por la

⁶² El Comercio. “Judicatura afirma que procedimiento directo permite agilizar sentencias”, <https://www.elcomercio.com/actualidad/judicatura-analisis-procedimientodirecto-sentencias-justicia.html>.

⁶³ Ecuador. Ecuador chequea. Romo: "Pasamos en 7 o 6 años de 11.000 personas privadas de libertad a 40.000 personas", <http://www.ecuadorchequea.com/2018/09/07/personas-privadas-de-la-libertad/>

Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, encaminada a sistematizar los casos en los que se utilizó el Derecho Penal como mecanismo de persecución a líderes sociales, vulnerado el debido proceso o el principio de independencia judicial y dismantelar estructuras de persecución política que existieron en el gobierno anterior. En este sentido, el Presidente del Consejo de la Judicatura Marcelo Merlo manifestó que “este hecho marca un hito en la historia del país en cuanto a la lucha contra la corrupción judicial” y que [...] “una de las conclusiones de la Mesa sería solicitar a la Asamblea Nacional para que realice reformas al Código Orgánico Integral Penal y se elimine la criminalización de la protesta social.”⁶⁴

Adicionalmente, otras instituciones como la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de su titular Gina Benavides, con fecha 14 de agosto de 2018, emitió resolución defensorial No 071 DPE DD REV.EXP 2018

Resolución que se constituye en “disculpas públicas” al Colectivo Yasunidos por “la falta de actuación oportuna de esta Defensoría del Pueblo del Ecuador frente a la denuncia presentada, la inadmisión y el posterior silencio frente a los hechos ocurridos en 2014”. Dicho documento, además, representa un aporte a la reparación integral de sus derechos humanos y reconoce plenamente a las personas que conforman dicho colectivo como defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.⁶⁵

En este mismo sentido se emiten las resoluciones 078 DPE DD REV.EXP 2018, de fecha 23 de agosto de 2018, para pedir disculpas a través de esta resolución al colectivo Yasunidos por la falta de atención oportuna de la Defensoría del Pueblo, 087 DPE DD REV.EXP 2018, de fecha 24 de septiembre de 2018 para reconocer que la Defensoría del Pueblo guardó silencio y no actuó de manera oportuna en cumplimiento de su mandato constitucional frente a la vigilancia del debido proceso dentro de la causa que se instauró en el denominado caso Los 10 de Luluncoto, y 088 DPE DD REV.EXP 2018, de fecha 24 de septiembre de 2018 para emitir disculpas públicas a FUNDAMEDIOS y a las y los periodistas agredidos; y a los defensores y

⁶⁴ Ecuador Consejo de la Judicatura. “La Judicatura conforma mesa de trabajo para investigar la persecución política y judicial”, accedido 27 de diciembre de 2018, http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1401%3Ala-judicatura-conforma-mesa-de-trabajo-para-investigar-la-persecucion-politica-y-judicial&catid=39%3Anoticias-home&Itemid=217.

⁶⁵ Ecuador Defensoría del pueblo. Defensoría Pública emitió “disculpas públicas” a colectivo Yasunidos, 16 de agosto del 2018, <http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-emitio-disculpas-publicas-a-colectivo-yasunidos/>

defensoras de la libertad de expresión cuyos derechos han sido vulnerados y frente a los cuales la Defensoría del Pueblo se mantuvo en silencio.

Así también, el 17 de octubre de 2018 la Defensoría del Pueblo realizó un acto de disculpas públicas en tres casos emblemáticos (10 de Luluncoto, Yasunidos y periodistas), donde se puede evidenciar que se vulneraron derechos y no se garantizaron normas básicas del debido proceso.

La reforma al COIP viene siendo planteada por diferentes sectores sociales y legislativos. A nivel social, el Colegio de Abogados de Pichincha está trabajando una propuesta de reformas al COIP, que incluye al procedimiento abreviado. Su presidente Dr. Ramiro García Falconí, ha sido enfático en la necesidad de crear un solo proyecto de reforma al COIP, articulando los proyectos que han sido presentados en la Asamblea Nacional y que actualmente se encuentran en trámite, pues refiere que lo que hay hasta ahora “son reformas aisladas, contradictorias y no brindan una línea clara de cambio, en muchos casos son expresión de populismo penal”.⁶⁶

Y a nivel legislativo, “el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es el cuerpo normativo que más pedidos de reforma tiene en la Asamblea. A la Comisión de Justicia llegaron alrededor de 100 proyectos”⁶⁷ actualmente se encuentran en trámite más de 100 proyectos de reforma de ley, de los cuales se analizará de forma sucinta 23 proyectos de reforma que se refieren al COIP, los mismos han sido presentados por asambleístas de diversos bloques políticos, según se ha verificado en la página oficial de la Asamblea Nacional en el período comprendido entre los años 2011-2018, se detallan a continuación:

° Alianza País ha presentado el proyecto de ley del Código Orgánico Integral Penal y 11 proyectos de reforma al COIP, encontrándose a la fecha tanto el COIP y 1 proyecto de reforma al mismo aprobados y 10 proyectos de reforma al COIP en trámite, evidenciándose en dichos proyectos de reforma características de populismo penal y punitivistas, pues basándose en la sensación de inseguridad que existe en el Ecuador, dentro de las propuestas existe una tendencia a aumentar las penas, ampliar aún más el catálogo de delitos con el afán de reducir la impunidad y se establecen procedimientos especiales con los cuales el estado promete a la ciudadanía un castigo

⁶⁶ Expreso.ec. El COIP tiene casi 100 pedidos de reforma. <https://www.expreso.ec/actualidad/coip-leyes-justicia-asambleanacional-seguridad-FD2410142> (28 de diciembre de 2018)

⁶⁷ Expreso.ec. El COIP tiene casi 100 pedidos de reforma. <https://www.expreso.ec/actualidad/coip-leyes-justicia-asambleanacional-seguridad-FD2410142> (28 de diciembre de 2018).

oportuno y ágil, procedimientos que han sido muy cuestionados desde diversos sectores.

° El partido político CREO ha presentado 5 proyectos de reforma al COIP en los cuales se proponer eliminar pena privativa de la libertad en contravenciones de tránsito y mantener la multa y pérdida de puntos, en otros casos eliminar la multa y que únicamente se reduzca puntos, lo cual evidencia que desde esta línea política existe una tendencia un poco más garantista que busca la disminución de penas especialmente en los casos culposos como los de tránsito, también se plantea eliminar informe previo sobre indicios de responsabilidades como presupuesto de procedibilidad en los delitos peculado y enriquecimiento ilícito con el fin de luchar contra la corrupción.

° Asambleístas de Pachakutik ha presentado 3 proyectos de reforma al COIP, los mismos que coinciden con el criterio de asambleístas de CREO en la necesidad de eliminar la pena privativa de la libertad en contravenciones de tránsito, plantean además la necesidad de reconocen más derechos a las personas privadas de libertad, precisan que delitos como ataque y resistencia y asociación ilícita no serán aplicables en los casos movilización y lucha social, delitos que se usaron en múltiples ocasiones por el gobierno anterior para criminalizar la protesta y coartar derechos. También se plantea eliminar informe previo sobre indicios de responsabilidades como presupuesto de procedibilidad necesario en los delitos peculado y enriquecimiento ilícito.

Los 5 proyectos de reforma al COIP corresponden a asambleístas de SUMA, Sociedad Patriótica, PSC e independientes, proyectos en los que se denota una corriente punitivista pues se propone incrementar el ámbito de aplicación de delitos como daño a bien ajeno o ataque y resistencia, eliminar la tala de consumo de droga, incrementar la pena de delitos contra la eficiente administración pública y eliminar el informe previo sobre indicios de responsabilidades como presupuesto de procedibilidad necesario en los delitos peculado y enriquecimiento ilícito.

De los 23 proyectos de ley analizados ninguno trata sobre el procedimiento abreviado, sus límites y sus repercusiones; una gran mayoría sugiere incrementar las penas y ampliar el ámbito de aplicación de los delitos, cerrando la puerta a la razón y con la única finalidad de aumentar las tasas de encarcelamiento, con nefastos efectos en el ámbito social, es evidente que nos encontramos ante una ola creciente de populismo penal que apunta al castigo sin perder tiempo ni dinero.

En el entorno actual se evidencia un cambio en las mayorías políticas existentes en la Asamblea Nacional, según consta en el listado general de asambleístas 2017-

2021 en la página oficial de la Asamblea Nacional, actualmente la misma está conformada por 137 asambleístas⁶⁸ de los cuales 43 forman parte de Alianza País, 24 de CREO, 12 PSC, 25 ex país y 33 entre independientes, Pachakutik, ID, PSP y otros movimientos, quedando en evidencia que no existe una mayoría absoluta como sucedía en la época del correísmo, por lo que para aprobar una ley o reforma de ley se deben crear alianzas con otros partidos políticos y de esta manera lograr mayoría.

De esta forma, se evidencia en el país un ambiente favorable para promover cambios normativos, pues existe un nuevo gobierno abierto al diálogo, autoevaluación desde las entidades públicas que permiten reconocer los excesos del gobierno anterior, así también procurar que las mismas funcionen de manera correcta y no tengan injerencia de ningún tipo, y diversidad en la Asamblea Nacional.

3.2.2. Análisis FODA

Teniendo en consideración el contexto existente y previo a la formulación de estrategias de incidencia tanto política como social se debe analizar factores internos y externos, el mismo que se denomina (FODA) y tiene que ver con fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A):

Fortalezas (F)

- La propuesta de reforma legal al procedimiento abreviado que se plantea es innovadora, al incluir un enfoque de derechos humanos que difícilmente ha sido incluido en sus proyectos tanto por asambleístas como por diversos sectores sociales, que buscan el castigo y se olvidan del ser humano.
- El tema planteado tiene altas posibilidades de aceptación ante diversos grupos sociales.
- El proyecto presentado contiene elementos sustanciales que viabilizarían una posible reforma al COIP y adicionalmente ha sido desarrollado de manera técnica.

Oportunidades (O)

- Diversos sectores han sido enfáticos en la necesidad de realizar reformas al COIP, entre ellos se encuentran asambleístas y diferentes sectores sociales. A

⁶⁸ Ecuador Asamblea Nacional. Pleno Asambleístas, consultado 18 de diciembre del 2018
<https://www.asambleanacional.gob.ec/es/pleno-asambleistas>

nivel social, el Colegio de Abogados de Pichincha está trabajando una propuesta de reforma al COIP, que incluye al procedimiento abreviado

- El COIP entró en vigencia en el año 2014, con el auspicio de Alianza País, al no ser el mencionado partido mayoría política en este momento permitiría crear alianzas entre diferentes bancadas a fin de lograr una línea clara de cambio.
- Según el listado general de asambleístas 2017-2021 que consta en la página oficial de la asamblea nacional, actualmente la misma está conformada por 137 asambleístas⁶⁹ de los cuales 43 forman parte de Alianza País, 24 de CREO, 12 PSC, 25 ex país y 33 entre independientes, Pachakutik, ID, PSP y otros movimientos. De este total, 23 asambleístas de diversos bloques políticos han planteado reformas al COIP, según se ha verificado en la página oficial de la Asamblea Nacional (ver anexo 1: Proyectos de Ley reformatoria al COIP)
- Una vez revisados los proyectos de reforma al COIP que constan actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, se ha evidenciado que ninguno aborda esta problemática lo que crea una oportunidad para que se tome en cuenta el proyecto planteado.
- La mesa de justicia ha anunciado que insistirá a la Asamblea Nacional que analice reformas propuestas al COIP en cuanto a los procedimientos directo y abreviado, quienes consideran que el procedimiento abreviado debe darse cuando el delito es sancionado con pena máxima privativa de la libertad de hasta cinco años y no como es ahora para delitos sancionados con penas de hasta diez años.
- Adicionalmente la Defensoría Pública y el Colegio de Abogados de Pichincha junto a un grupo de profesionales están estructurando propuestas de reforma. El Colegio de Abogados es un actor muy importante dentro del presente proyecto, debido a que mantiene una relación cercana con asambleístas quienes pueden presentar el proyecto en la Asamblea Nacional.

⁶⁹ Ecuador Asamblea Nacional. Pleno Asambleístas, <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/pleno-asambleistas>

Debilidades (D)

Al tratarse de una propuesta de reforma aislada podría no ser considerada dentro de la propuesta de reforma que plantee el Colegio de Abogados de Pichincha si la misma no se alinea a sus objetivos y propuesta de cambio.

Amenazas (A)

- Podrían existir una o varias bancadas que se opongan a la reforma propuesta, pues opinan que el tratamiento de penas mínimas, así como que se ratifique el estado de inocencia de los procesados da lugar al incremento de índices delincuenciales.
- Existiría discusiones y pugna entre diferentes enfoques que plantearan el dilema entre la impunidad y la indefensión.
- El populismo penal ha ganado espacio en los últimos años, el mismo cierra la puerta a la razón y exige un enfoque cada vez más punitivo incluyendo en muchos casos la pena de muerte o la castración química, lo que cual en muchas ocasiones relaja espacios a los Derechos Humanos.
- Se corre el riesgo que la propuesta de reforma al COIP, aun cuando logre pasar en el pleno de la Asamblea, pueda ser vetada por el Ejecutivo.

3.3.3. Estrategias de intervención

Como parte del Derecho de interés público⁷⁰, que vincula lo público al interés colectivo, alejándolo de aquello mal concebido tan solo como lo estatal, la incidencia estratégica, se muestra como un medio para promover cambios estructurales, a través de la implementación de políticas públicas, reformas legales o simplemente creando conciencia social y promoviendo el interés público. Instituyéndose en una herramienta que procura la tutela efectiva en materia de derechos humanos, valiéndose para el efecto de diversas estrategias, actividades o componentes.

En virtud de lo expuesto es menester proponer un conjunto de estrategias que promuevan y protejan el derecho a la presunción de inocencia en la aplicación del procedimiento abreviado, en este sentido se debe tomar en cuenta las siguientes peculiaridades:

⁷⁰ Concepto que nace en los EEUU en los años sesenta del siglo XX y nos muestra una adaptación del derecho en la forma de defender a diversos colectivos sociales vulnerables, para quienes el acceso a la justicia es prácticamente negado.

[E]n los procesos de incidencia hay mucho que hacer con pocos recursos, incluyendo el escaso tiempo. Además, los entornos son cambiantes y las oportunidades políticas que aparecen y desaparecen, pueden hacer que una misma organización tenga que llevar a cabo más de un proceso de incidencia a la vez. Finalmente, muchas veces las organizaciones se ven en la necesidad de reaccionar ante acciones de otros, incluyendo las instituciones públicas. Por esto, muchas veces es difícil mantener una visión estratégica de los procesos de incidencia.⁷¹

Lo que implica considerar las particularidades del caso para poder visibilizar las necesidades específicas que permitan crear una propuesta de incidencia estratégica y promover una reforma legal, con la que se logre armonía normativa entre los estándares internacionales de derechos humanos, los derechos que otorga nuestra Carta Magna y los requisitos de aplicación del procedimiento abreviado.

Bajo este marco, se plantea una estrategia que combina tres dimensiones, la jurídica, formulada con la propuesta de cambio normativo, la política encaminada a incidir en los tomadores de decisión y la social que reconoce el rol fundamental que tienen los actores sociales para promover la exigibilidad social de la reforma.

a) Dimensión política

Según refieren los autores Andrés McKinley y Patrick Baltazar la incidencia política “son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder”⁷². Con este tipo de incidencia se busca resolver problemas específicos como es el caso planteado, además de fortalecer y empoderar a la sociedad civil, lo cual a la larga consolida la democracia. Además se hace hincapié en que “son las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general.”⁷³

⁷¹ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *¿Cuáles son los incidentes claves de la incidencia?*, en *Inclusión, Derechos Humanos e Incidencia política*. Módulo 5 (San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 2004), 45.

⁷² Andrés McKinley y Patrick Baltazar, “Estrategia General para los litigios de Alto Impacto: Manual de litigio estratégico”. Anexo 2, en *Centro para el Desarrollo de Actividades de Población* (CEDPA) y Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA), edit., Manual para la facilitación de procesos de incidencia política, (Washington, WOLA y CEDPA, 2005), 5

⁷³ McKinley y Baltazar, “Estrategia General para los litigios de Alto Impacto”, 5

La dimensión política de la sociedad está relacionada con factores de poder; se relaciona con la toma de decisiones. El componente político se justifica en la medida que se busca la participación de diversos actores y medios con un fin determinado que se plasma en la búsqueda de un cambio estructural en materia de derechos humanos vía reformas legislativas, aplicación de políticas públicas o simplemente el crear conciencia social. La incidencia política resulta ineludible dada la carga de compromiso social que requiere, asociado con asuntos que resultan ser de interés público en la medida que rebasan la esfera de lo particular hacia lo colectivo y comunitario.

El proceso legislativo es el proceso formal a seguir con el objetivo de elaborar o modificar una ley; está compuesto de una estructura ordenada de etapas o pasos formales. A través de este proceso se elaboran las leyes y debe cumplir requisitos legales y constitucionales para obtener el carácter de ley. “El Proceso Legislativo es la técnica de elaboración de la ley guiada por el Principio de Razonabilidad”⁷⁴. El Proceso Legislativo hace referencia a las reformas y a las interpretaciones ya que sin diferenciar si se forma una nueva ley, se la deroga, se reforme o se interprete una norma legal, se lo hace a través de una nueva ley denominada reformatoria o interpretativa. Adicional a estas reformas e interpretaciones, también se abarcan la aprobación de tratados internacionales, producción de acuerdos y resoluciones legislativas. El procedimiento legislativo ha sido concebido habitualmente como una forma de obtener un objetivo que en este caso es producir una ley.

Por el contexto, las instituciones encargadas de la elaboración y reforma de las leyes son instituciones legislativas compuestas por órganos colegiados con miembros seleccionados de una diversidad de partidos políticos y a través de votación popular. La composición de estas instituciones se caracteriza por el pluralismo político de un estado.

Los elementos descritos al analizar conceptualmente el procedimiento abreviado nos permite observar que genera múltiples consecuencias en derechos humanos. Entendiendo que existe un vínculo jurídico que permite a la ciudadanía

⁷⁴ Jorge. Machicado, *¿Qué es el Procedimiento Legislativo?: Axioma que obliga a los actos de los poderes públicos deben seguir el "debido bproceso" so pena de ser declarados inconstitucionales*. 2009, consultado 2 de julio de 2018, <http://jorgemachicado.blogspot.com>

participar formalmente en las decisiones generales y públicas que se toman en una comunidad.

Se debe procurar que todas las personas puedan conocer, comprender y reivindicar sus derechos, es así que la relación entre el Estado y los ciudadanos cambiará en medida que exista mayores niveles de conocimiento de sus derechos que permita exigir su observancia plena. Por lo que una plataforma política es el escenario que permitiría incidir en la conciencia de los derechos propios de todos los seres humanos y permitiría reconfigurar el Estado.

La Asamblea Nacional está estructurada por el Pleno, la Presidencia de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, las Comisiones Especializadas, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la Unidad de Técnica Legislativa y los demás que establece el Pleno. El art. 125 de la Constitución establece que se “integrará comisiones especializadas permanentes en las que participarán todos sus miembros”. Para solicitar la reforma al COIP, se puede realizarlo a través de un asambleísta con el apoyo de una bancada, la misma que serviría de plataforma para plantear la reforma propuesta ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

En esta dimensión como objetivo hacer incidencia política con asambleístas que nos permitan tener acceso a las bancadas con mayor representación dentro de la asamblea, a fin de encontrar actores claves que con la finalidad de influir en la reforma legal propuesta; así como dar a conocer los excesos en la aplicación del mencionado procedimiento y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, siendo la estrategia el cabildeo⁷⁵ legislativo ante asambleístas de la comisión encargada y a la vez generar apoyo social.

Para lograr la reforma planteada se debe identificar a los actores sociales inmersos en este caso y los roles que ejercen sea a favor o en contra. En el presente caso intervienen las víctimas, sus familiares, actores particulares e instituciones públicas. Como víctimas tenemos a los 60 jóvenes inmersos en el caso Mejía quienes sufrieron la vulneración del derecho a la presunción de inocencia con la aplicación de procedimiento abreviado, es necesario ubicar a estos individuos y a sus familias para que puedan conformar una organización la misma que con la colaboración de otros actores sociales como el Colegio de Abogados ingresen la

⁷⁵ Es la capacidad de alcanzar un cambio específico mediante la influencia de un sujeto de decisión.

propuesta a la Asamblea Nacional, como un compromiso con procesos democratizadores y respeto de derechos humanos.

Como actores particulares tenemos a expertos en incidencia política, social y comunicacional, grupos de la sociedad civil, asambleístas garantistas de derechos, dependencias gubernamentales quienes podrán colaborar con información relacionada a la temática y de ser necesario coadyuvar en la incidencia política que deberá realizarse dentro de la Comisión de Justicia. Estos actores son los que podría considerarse aliados.

Es necesario contar con instituciones que han estado cerca del caso y que tienen la responsabilidad de protección de derechos, como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, a quienes se les puede solicitar apoyo de expertos en derechos humanos para de esta forma contar con mayor cantidad de actores para realizar un cabildeo legislativo. Asambleístas quienes tienen la obligación de legislar bajo el deber de respetar derechos y puede neutralizar a asambleístas de tendencia punitivista.

En este aspecto es fundamental generar alianzas, así como promover movilizaciones de para generar apoyo público, al convencer lograr que actores que se mantenían neutrales conozcan la realidad y contribuyan para garantizar el éxito.

Cuadro 1
Acciones de la Estrategia Política

Objetivo	Etapas del procedimiento legislativo	Acciones	Actores
Apertura democrática	Ingreso	Ingresar la propuesta a la Asamblea, como un compromiso con procesos democratizadores y respeto de derechos humanos	Directorio Colegio de Abogados de Pichincha
Proyecto pase a la Asamblea para ser tratado	CAL	Apoyarse en expertos para hacer posible la incidencia política	Expertos en incidencia política, social y comunicacional
Construir y fortalecer nuevas alianzas	Comisión	Lograr impacto en la incidencia política	Grupos de la sociedad civil y partidos políticos

Garantizar equidad	Pleno	Cabildeo legislativo	Dependencias gubernamentales, grupos tanto públicas como privadas
Neutralizar a los aliados del adversario	Ejecutivo	Activación ciudadana de colectivos que buscan tutelar derechos	Asociaciones y grupos de interés que conozcan la realidad para garantizar el éxito

Elaborado por: Diana Segarra, 2018

b) **Dimensión social**

Se entiende por dimensión social al conjunto de elementos vinculados a las relaciones entre los individuos o dicho en otras palabras a la socialización de las personas, que buscan satisfacer sus necesidades materiales y simbólicas en grupo debido a que el ser humano es un ser social. La dimensión social “permite mayor alcance de actuación e impacto, confiriendo credibilidad y economía de recursos, si este debidamente planificada. Al implementarse, se deberá buscar ampliar el ámbito de influencia social [...], involucrando al mayor número de personas en las actividades de acompañamiento y apoyo, procurando incrementar su impacto.”⁷⁶

Con este precedente se busca un cambio significativo que asocia el proceso de enseñanza jurídica, al concepto de interés público que demanda la búsqueda de cambios sociales estructurales que se pueden propiciar a través del ejercicio del derecho desde una perspectiva de conciencia y compromiso social que asume la defensa siendo los operadores de justicia quienes deben tutelar por garantizar los derechos consagrados en la Constitución, es menester capacitar a jueces, fiscales y defensores públicos sobre los límites del procedimiento abreviado y el correcto uso del mismo, pues debe buscarse un equilibrio donde existan procesos rápidos pero respetando todos los derechos humanos.

Teniendo como referente el caso del Colegio Mejía, se plantea con miras a tutelar el derecho a la presunción de inocencia dentro de la aplicación del procedimiento abreviado se muestra indispensable un trabajo de concientización previa, que permita visualizar la problemática dentro del entorno social, para esto se buscará aliados en élites políticas, sociales y medios de comunicación.

Para coordinar una estrategia social debe realizarse acciones colectivas coordinadas por familiares y personas directamente relacionadas con el caso Mejía,

⁷⁶ McKinley y Baltazar, “Estrategia General para los litigios de Alto Impacto”, 17

quienes procurarían realizar alianzas estratégicas y promover este proceso de cambio social donde se deben realizar acciones colectivas, entre estas la movilización y procurar reivindicar derechos dentro de las instituciones públicas con cierto nivel de organización orientadas a generar cambios y conservar dichos cambios. Se debe contar con una serie de acciones como foros, movilización ciudadana y una agenda de medios que permita posicionar el tema en la sociedad ecuatoriana.

Es fundamental contar con una estrategia comunicacional que permita generar alianzas, contribuir al apoyo público y con esto lograr la reforma planteada. En esta dimensión es importante dar a conocer que el proceso se desarrolla en el contexto de la criminalización de la protesta social que se dio en el Caso del Colegio Mejía, en la ciudad de Quito en una protesta estudiantil en las inmediaciones del colegio, ya que de ello dependerá el éxito de alianzas y coaliciones.

El este sentido, para lograr las estrategias planteadas se requiere contar con recursos financieros que permitan tanto la movilización, reuniones con autoridades entre ellas asambleístas así como poner en marcha la estrategia comunicacional, pues de no contar con organización y recursos financieros se dificultaría el cumplimiento de las estrategias.

En cuanto a los actores y hechos, tenemos los siguientes: 1) El gobierno ecuatoriano anterior quien mantenía una política represiva, tendiente a criminalizar la protesta, 2) Estudiantes del colegio Mejía, quienes afrontaron un proceso penal por expresar su malestar con el gobierno, 3) Función judicial (jueza y fiscal) quienes a la época de los hechos no tenían plena independencia judicial, 4) Medios de comunicación que no contaban con libertad de expresión; actualmente se debe contar con 1) Estudiantes del colegio Mejía, víctimas del abuso de poder, 2) Movimientos sociales de derechos humanos que apoyen la defensa de los derechos vulnerados, 3) Representantes de instituciones públicas que protegen derechos humanos, 4) Asambleístas, quienes deben procurar que las leyes penales tengan armonía con los derechos consagrados en la Constitución, 5) Medios de comunicación que den a conocer la realidad de los hechos, 6) Función judicial con mayor independencia, 7) Consejo de participación transitorio y Consejo de la Judicatura comprometidos con revisar casos en los que se dieron arbitrariedades, aunque los mismos estén sentenciado, 8) Otros actores (Instituciones privadas, Defensoría Pública, Colegio de Abogados de Pichincha, actores particulares, instituciones académicas, expertos, etc.)

En el caso analizado se evidencia que se vulneraron varios derechos del debido proceso, así como que se usó a la justicia como instrumento para criminalizar la protesta, esta primera situación llena de vulneración de derechos y es avalada por el gobierno de ese momento finalizó con el cambio de gobierno que actualmente mantiene una línea de gobierno distinta. Actualmente nos encontramos ante una situación distinta en la que por parte del gobierno se procura crear una política que garantice efectivamente los derechos de sus ciudadanos y acepta propuestas de los ciudadanos para mejorar y erradicar los excesos que en el gobierno anterior se convirtieron en una práctica diaria.

Es necesario contar con el apoyo de organizaciones que tengan bases a nivel nacional y puedan tener relación con instituciones públicas que deben velar por la protección y reparación de derechos vulnerados, estos actores son aquellos con los que debería contarse, así como expertos independientes que puedan aportar con conocimiento y experiencias técnicas a la propuesta.

Se debe contar con objetivos y acciones específicas por lo que en la dimensión política se propone ubicar a individuos involucrados en el caso Mejía, así como casos similares quienes realizarían acercamiento con asambleístas y Colegio de Abogados para que los mismos conozcan la propuesta y la apoyen, en este sentido también se debe difundir información verídica sobre el caso y crear una estrategia que acompañe durante el desarrollo de la reforma planteada, solicitar la comparecencia del Colegio de Abogados y una comisión de familiares ante el CAL

A través de la movilización, así como medios de comunicación serios que difundan la verdad de los hechos, se logrará acumular fuerza ciudadana con la cual se hará factible preparar una agenda de comparecencias ante el pleno en la que participen familiares, gremios estudiantiles y profesores universitarios.

Se hace necesario contar con medios de comunicación para difundir el caso a través de reportajes y revistas, entre otros como las redes sociales para sensibilizar a la sociedad sobre el contexto del procedimiento abreviado y generar presión a los asambleístas, también es menester estar presente en las sesiones del pleno y promover una difusión inmediata de las decisiones que allí se tomen, realizar acciones de cabildeo con los jefes de bancada con el fin de asegurar el número suficiente de votos.

Cuando se remita el proyecto al ejecutivo se plantea generar una agenda comunicacional para difundir acciones, pues debe profundizarse la información sobre el tema para que la opinión pública pueda crear juicios racionales para generar el

debate y generar una opinión mayoritaria que apoye la propuesta, al ubicar el tema se busca generar cambios dentro de funcionarios públicos.

Cuadro 2
Acciones de Estrategia Social

Objetivo	Etapas del procedimiento legislativo	Acciones	Actores
Conformar de una organización	Ingreso	Ubicar a individuos involucrados en el caso Mejía, así como casos similares quienes realizarían acercamiento con asambleístas y Colegio de Abogados para que los mismos conozcan la propuesta y la apoyen	Individuos y sus Familiares
Manejar y difundir información	CAL	Difundir información verídica sobre el caso y crear una estrategia que acompañe durante el desarrollo de la reforma planteada, solicitar la comparecencia del Colegio de Abogados y una comisión de familiares ante el CAL	Organización caso Mejía
Acumular fuerza ciudadana	Comisión	Movilización, Democratizar acceso a los medios de comunicación, preparar una agenda de comparecencias ante el pleno en la que participen familiares, gremios estudiantiles y profesores universitarios	Sociedad y organizaciones
Generar corrientes de opinión favorables con la propuesta de reforma	Pleno	Difundir el caso a través de reportajes, revistas entre otros para sensibilizar a la sociedad sobre el contexto del procedimiento abreviado y generar presión a los asambleístas, estar	Medios de comunicación

		presente en las sesiones del pleno y promover una difusión inmediata de las decisiones que allí se tomen, realizar acciones de cabildeo con los jefes de bancada con el fin de asegurar el número suficiente de votos.	
Mantener el tema en los medios de comunicación	Ejecutivo	Generar una agenda comunicacional para difundir acciones y generar cambios dentro de funcionarios públicos	Medios de comunicación, sociedad y asambleístas

Elaborado por: Diana Segarra, 2018

Se evidencia un cambio de paradigma en el sistema democrático actual, por parte de autoridades públicas y de autoridades judiciales, se ha reconocido que en el periodo del correísmo se dieron omisiones que violan derechos y se trabaja arduamente por repararlos. Situación con la que se amplían las posibilidades de una reforma que garantice el ejercicio de los derechos del debido proceso, haciendo énfasis en el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación.

Sin embargo hasta la presente fecha el Estado no ha adoptado acciones que garanticen el uso adecuado de estos procedimientos especialísimos implementados en el COIP, lo que involucra la continuidad de vulneraciones de derechos. Por medio de las autoridades pertinentes mientras no se logre viabilizar la reforma, el estado debe pedir disculpas públicas y establecer mecanismo de reparación y no repetición de vulneración de derechos del debido proceso especialmente en los casos penales en los que se ve en juego la libertad de los procesados.

Las estrategias y la reforma planteada tiene como principal objetivo que se repare el derecho vulnerado, se busca adicionalmente lograr una transformación estructural en la forma en la que se administra justicia en el ámbito penal, tomando en cuenta a las personas que sufren este tipo de vulneración de derechos. El presente caso se propone una reforma a la ley penal vigente para a futuro lograr un amparo eficaz de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y tratados internacionales de derechos humanos, para lograr este propósito se

plantea la movilización política y social como una acción efectiva para lograr que las autoridades pertinentes presten atención al asunto planteado.

Debe buscarse una forma de diálogo interinstitucional entre autoridades gubernamentales y las víctimas de excesos del gobierno anterior, para lograr empoderarlos y que se cumpla la reforma planteada, la misma que plantea incorporar a la normativa penal un enfoque de derechos humanos, las estrategias planteadas en el ámbito jurídico, político y social mediante las cuales se busca conformar una organización que cree alianzas, que adicionalmente difundir la realidad de los hechos, aspirando con esto acumular fuerza ciudadana e incidir en la aprobación de la reforma propuesta al COIP en relación al procedimiento abreviado y la posibilidad que se le otorga al juez de emitir auto de sobreseimiento en los casos que no existan pruebas contundentes.

En la presente investigación se evidencia ciertas falencias que existen en el sistema penal en lo relacionado al procedimiento abreviado, sin bien busca agilizar los procesos de forma efectiva, también se ha activado al aparato punitivo logrando imponer penas en el menor tiempo posible. Se destaca por parte de las autoridades el incremento de la violencia y la inseguridad lo que se traduce en insatisfacción social, existen innumerables causas que deben ser resueltas por un sistema judicial congestionado lo que orilla a los funcionarios del sistema judicial a aplicar herramientas que permitan evacuar los procesos.

El sistema judicial se ha olvidado de los seres humanos que sobreviven en la pobreza y la desigualdad social y los ha convertido en números de causas en las que fríamente hay que resolver, sin embargo todos como parte de una sociedad debemos concientizarnos en el respeto a los derechos humanos y el Estado debe desarrollar efectivamente la calidad de garante de derechos y a través de los funcionarios judiciales respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

En conclusión se puede decir que el procedimiento abreviado aunque permite una descongestión de las salas de juzgamiento en el país y está sustentado bajo una normativa extensa, también vulnera principios establecidos en la Constitución de la República como el debido proceso, presunción de inocencia, no autoincriminación entre otros.

No cabe la menor duda que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental con el que cuenta todo individuo, por lo que este derecho que debe ser reconocido y protegido por el estado, siendo los jueces quienes deben aplicarlo con sujeción a los instrumentos de derechos humanos y a la Constitución, por lo tanto para que se desvanezca la presunción de inocencia es necesario que se pruebe fehacientemente la culpabilidad de la persona procesada con pruebas irrefutables sin lugar a que exista duda razonable.

Bajo la normativa legal vigente, para que proceda la aplicación del procedimiento abreviado el Código Orgánico Integral Penal requiere de la persona procesada que este admita el hecho que se le imputa, de esta forma se inculpa vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia haciéndose beneficiario a la aplicación de una pena mínima so pena de hacerse merecedor de una pena mayor de darse una sentencia condenatoria en juicio ordinario.

La aplicación del procedimiento abreviado tal cual se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal no brinda las garantías necesarias de defensa a la persona procesada, cuando dentro de la tramitación de dicho procedimiento no se cumple con principios básicos que forman parte de dicho derecho, cuando resulta inoficioso la evacuación de nuevos elementos probatorios a su favor así como de la contradicción de aquellos presentados en su contra.

Se está mal entendiendo en algunos casos la aceptación del hecho fáctico, pues esta aceptación no reemplaza la obligación que tiene Fiscalía de probar el grado de participación del presunto sospechoso. Una vez calificada la flagrancia e iniciado el proceso de sustanciación de la causa, Fiscalía debe aportar elementos de convicción que se constituirán en prueba; sin embargo en la actualidad las personas procesadas, en asocio con sus abogados/as defensores, no pueden objetar la prueba una vez

admitido el hecho fáctico que se les endilgaba a fin que proceda la aplicación del procedimiento abreviado.

Es claro que en caso de los estudiantes del Colegio Mejía se vulneraron derechos de igualdad, derecho a la defensa, el principio a la pertinencia, el derecho al debido proceso, derecho a la proporcionalidad. Por esta razón, el caso se debe tener como precedente para modificar el procedimiento, promoviendo cambios estructurales valiéndose de las dimensiones social y política. Con cada una de estas estrategias se puede crear conciencia social y captar el interés público que llevará a buscar la tutela efectiva en materia de derechos humanos. Es ahí cuando surge la necesidad de una reforma en el COIP, para que se regule de mejor manera el procedimiento abreviado, con la finalidad que no se vulnere ningún derecho de la persona procesada y que se evacúe las pruebas necesarias para la imputación del hecho.

Se evidencia un cambio de paradigma en el sistema democrático actual, por parte de autoridades públicas y de autoridades judiciales, se ha reconocido que en el periodo del correísmo se dieron omisiones que violan derechos y se trabaja arduamente por repararlos. Situación con la que se amplían las posibilidades de una reforma que garantice el ejercicio de los derechos del debido proceso, haciendo énfasis en el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación.

Sin embargo hasta la presente fecha el Estado no ha adoptado acciones que garanticen el uso adecuado de estos procedimientos especialísimos implementados en el COIP, lo que involucra la continuidad de vulneraciones de derechos. Por medio de las autoridades pertinentes mientras no se logre viabilizar la reforma, el estado debe pedir disculpas públicas y establecer mecanismo de reparación y no repetición de vulneración de derechos del debido proceso especialmente en los casos penales en los que se ve en juego la libertad de los procesados.

Las estrategias y la reforma planteada tiene como principal objetivo que se repare el derecho vulnerado, se busca adicionalmente lograr una transformación estructural en la forma en la que se administra justicia en el ámbito penal, tomando en cuenta a las personas que sufren este tipo de vulneración de derechos. El presente caso se propone una reforma a la ley penal vigente para a futuro lograr un amparo eficaz de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y tratados internacionales de derechos humanos, para lograr este propósito se

plantea la movilización política y social como una acción efectiva para lograr que las autoridades pertinentes presten atención al asunto planteado.

Debe buscarse una forma de diálogo interinstitucional entre autoridades gubernamentales y las víctimas de excesos del gobierno anterior, para lograr empoderarlos y que se cumpla la reforma planteada, la misma que plantea incorporar a la normativa penal un enfoque de derechos humanos, las estrategias planteadas en el ámbito jurídico, político y social mediante las cuales se busca conformar una organización que cree alianzas, que adicionalmente difundir la realidad de los hechos, aspirando con esto acumular fuerza ciudadana e incidir en la aprobación de la reforma propuesta al COIP en relación al procedimiento abreviado y la posibilidad que se le otorga al juez de emitir auto de sobreseimiento en los casos que no existan pruebas contundentes.

Recomendaciones

Si bien la finalidad del procedimiento abreviado es servir como un elemento para que el sistema judicial sea ágil y rápido, se debe establecer un mecanismo idóneo que permita coadyuvar el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la prohibición de no autoincriminación, que las pruebas sean obtenidas legítimamente y que asegure además el respeto de todos los derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

A través de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado se amplió, pues su universo hoy comprende delitos sancionados con una pena máxima de 10 años, de esta forma aun cuando las penas dentro de la normativa legal vigente se muestran más severas, procede respecto de delitos que antes no lo hacía, sin embargo la justicia negociada en materia penal debería instituirse como excepción y no como regla.

Es necesario una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, para que se regule de mejor manera el procedimiento abreviado, con la finalidad que no se vulnere ningún derecho de la persona procesada y que se evacúe las pruebas necesarias para la imputación del hecho.

Siendo los funcionarios públicos quienes deben tutelar los derechos consagrados en la Constitución, es menester capacitar a los operadores de justicia tanto jueces, fiscales y defensores públicos sobre los límites del procedimiento abreviado y el correcto uso del mismo, pues debe buscarse un equilibrio donde existan procesos rápidos pero respetando todos los derechos humanos.

En el caso del Colegio Mejía, para el diseño y desarrollo de un proceso de incidencia estratégica con miras a tutelar el derecho a la presunción de inocencia dentro de la aplicación del procedimiento abreviado se muestra indispensable un trabajo de concientización previa, que permita visualizar la problemática dentro del entorno social.

Se hace necesario coordinar alianzas con organismos no gubernamentales y gubernamentales que hagan posible la admisión de la propuesta de reforma al procedimiento abreviado y posterior reforma de dicho procedimiento.

Actualmente el artículo 637 del COIP establece que si el procedimiento es aceptado, se dictará la sentencia condenatoria, sin embargo debería realizarse por parte del juez un análisis profundo del grado de participación del presunto sospechoso, así como de los elementos de convicción presentados, en el caso de no ser suficientes no

se debe coartar los derechos del procesado y sometérselo a un procedimiento ordinario, debe primar su derecho a la presunción de inocencia y en este sentido se debe dictar sentencia absolutoria sin más trámite.

Bibliografía

- Ávila Santamaría, Ramiro. *La (IN) Justicia Penal en la Democracia Constitucional de Derechos: Una mirada desde el garantismo penal*. Quito: Ediciones Legales EDLE S.A./Universidad Andina Simón Bolívar. 2013.
- Aguirre., Vanesa. “La administración de justicia en Ecuador 2012”. *En Horizontes de los Derechos Humanos. Ecuador 2012*, editado por Gina Benavides Llerena y Gardenia Chávez Núñez. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar, 2013.
- Agurto, Carmen. “Procedimiento abreviado: negociación de la inocencia del imputado”. *Memoria para optar por el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales*, Universidad de Talca, Chile, 2002.
- Bolivia. *Código de Procedimiento Penal*, Ley No1970 de 25 de marzo de 1999, <http://silep.vicepresidencia.gob.bo/SILEP/masterley/118405>
- Cabezas, Richard. “El rol del fiscal en el procedimiento penal abreviado” Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2008.
- Campaña Jarrín, Johana. “Incidencia jurídica penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana”. Tesis previa a la obtención del título de abogado, Universidad Central del Ecuador, 2014. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>.
- Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, Ley 906 de 2004, Diario Oficial 45658 de Septiembre 1 de 2004 <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787>
- . Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia” C-516/07. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27340#0>
- . Corte Constitucional. “Sentencia” C-394/94. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-394-94.htm>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Derecho a la verdad en AméricaOEA/Ser.L/V/II.152*, Doc. 2, 13 agosto 2014. <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.
- Corigliano, Mario. “Juicio abreviado una imposición de criterios de oportunidad en el sistema penal” http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/Abreviacion_del_proceso_penal.pdf

- Chile. *Código Procesal Penal*, Ley 19696, publicación 12-10-2000, <<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595>>
- Ecuador. *Código de Procedimiento Penal* (2000). Registro Oficial, Suplemento, No.360, 13 de enero del 2000.
- . *Código Orgánico Integral Penal*. Registro Oficial, Suplemento, No.180, 10 de febrero de 2014.
- . *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial, No. 449, de 20 de octubre de 2008.
- . Corte Nacional de Justicia. Resolución Inadmisión, en *Juicio No. 17721-2014-1914*, 10. <http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/consulta-de-causas>
- . Ecuador chequea. Romo: "Pasamos en 7 o 6 años de 11.000 personas privadas de libertad a 40.000 personas" <http://www.ecuadorchequea.com/2018/09/07/personas-privadas-de-la-libertad/>
- . Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. “Sentencia”. En *Juicio No. 17281-2014-3541*. <http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf>
- Ecuador Consejo de la Judicatura. *La Judicatura conforma mesa de trabajo para investigar la persecución política y judicial*. http://www.funcionjudicial-chimborazo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1401%3Ala-judicatura-conforma-mesa-de-trabajo-para-investigar-la-persecucion-politica-y-judicial&catid=39%3Anoticias-home&Itemid=217
- Ecuador Defensoría del pueblo. Defensoría Pública emitió “disculpas públicas” a colectivo Yasunidos. 16 de agosto del 2018. <http://www.dpe.gob.ec/defensoria-del-pueblo-emitio-disculpas-publicas-a-colectivo-yasunidos/>
- Ecuador Fiscalía General del Estado. “Fiscalía logra 44 sentencias en primeros casos de procedimiento directo”. <https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-logra-44-sentencias-en-primeros-casos-de-procedimiento-directo/>
- El Comercio. “54 manifestantes del Mejía con prisión preventiva”. <https://www.elcomercio.com/actualidad/manifestantes-mejia-prision-preventiva-fiscalia-html>.

- . “Judicatura afirma que procedimiento directo permite agilizar sentencias”, <https://www.elcomercio.com/actualidad/judicatura-analisis-procedimientodirecto-sentencias-justicia.html>.
- Enlace Nro. 391, desde el colegio Juan Pío Montufar, Quito. <https://www.enlaceciudadado.gob.ec>.
- España. *Ley de enjuiciamiento criminal*, Real decreto de 14 de septiembre de 1882, Art.757. <https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf>
- Estados Unidos. *Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, Enmienda VI*
- Eur. Court H.R. Case *Allenet de Ribemont v France*, judgment of 10 february 1995, (Documento núm. 15). Citado en Sarmiento, D., Mieres, L. J. M., Linera en *Las sentencia básicas del tribunal europeo de derechos humanos* (Thomson Civitas, 2007). <http://personal.us.es/juanbonilla/contenido/CM/TRIBUNAL%20EUROPEO%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS/JURISPRUDENCIA%20TEDH/SENTENCIAS%20BASICAS%20DEL%20TEDH.pdf>.
- Expreso.ec. “El COIP tiene casi 100 pedidos de reforma”. <https://www.expreso.ec/actualidad/coip-leyes-justicia-asambleanacional-seguridad-FD2410142>.
- Ferrajoli, Luigi. *Derecho y razón: Teoría del garantismo penal*. Madrid - España: Editorial Trotta, 1995. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/24861.pdf>
- . “Las lesiones legales del modelo constitucional del proceso penal” en Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps.). *El procedimiento abreviado*. Argentina: Editores del Puerto, 2001.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “¿Cuáles son los incidentes claves de la incidencia?”, en *Inclusión, Derechos Humanos e Incidencia política Módulo 5*. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 2004.
- Langbein, John. “Tortura y plea bargaining” en Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps.). *El procedimiento abreviado*. Argentina: Editores del Puerto, 2001.
- Horwitz, María Inés. “Algunas formas de acuerdo o negociación en el Procedo penal: tendencia del derecho comparado”, *Revista de Ciencias Penales* No.2.
- Machicado, Jorge. *¿Qué es el Procedimiento Legislativo?: Axioma que obliga a los actos de los poderes públicos deben seguir el "debido bproceso" so pena de ser declarados inconstitucionales*. 2009. <http://jorgemachicado.blogspot.com>

- Maier, Julio y Bovino, Alberto. “El Procedimiento Abreviado”, citados en Campaña Jarrín, Johana Estefanía. *Incidencia jurídico penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana*. Tesis previa a la obtención del título de abogado, Universidad Central del Ecuador, 2014. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>.
- . *El Procedimiento Abreviado*. Buenos Aires - Argentina: Editorial del Puerto, 2004.
- Marino Aguirre, Santiago. *El Juicio Penal Abreviado*. Buenos Aires: Edit. Abelardo-Perrot, 2001.
- Melero, Lourdes. “La agilización del proceso penal y las garantías de defensa del imputado en la instrucción de los juicios rápidos”. Tesis doctoral, Universidad de la Laguna, España, 2006/07. <ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs334.pdf>.
- McKinley, Andrés y Baltazar, Patrick. “Estrategia General para los litigios de Alto Impacto. Manual de litigio estratégico”. Anexo 2, en Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA), edit., Manual para la facilitación de procesos de incidencia política. Washington: WOLA y CEDPA, 2005.
- Mommsen, Theodor. *Derecho penal romano*. Bogotá: Temis, 1976.
- Narváez, Marcelo. *Procedimiento penal abreviado*. Quito: Librería Jurídica Cevallos, 2003.
- Naciones Unidas, *Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos: Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos Creados en Virtud de Tratados*, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 de mayo de 2008. http://civilisac.org/civilisweb/wp-content/uploads/HRI.GEN_1.Rev9_sp-1-1.pdf.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos Adoptadas con arreglo al protocolo facultativo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Volumen 8, Períodos de sesiones 75° a 84°. julio de 2002 – julio de 2005*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2006. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol8sp.pdf>.
- Pásara, Luis. *El uso de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en la administración de justicia* (2da Ed). Quito-Ecuador: Ministerio de Justicia

- Derechos Humanos y Cultos/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ecuador, 2009.
- . *Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana: Resumen ejecutivo*. Lima: Fundación del debido proceso, 2014.
- Perú. *Código de Procedimiento Penal*, Decreto Legislativo No.957, Diario Oficial El Peruano de 29 de Julio de 2004.
<http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-nuevocodprocpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo>
- Santibáñez, María. “La justicia negociada y el procedimiento abreviado”. Instituto Chile de Derecho Procesal, 03 de diciembre de 2012: 1 <http://www.ichdp.cl/la-justicia-negociada-y-el-procedimiento-abreviado/>
- Sarmiento, D., Mieres, L. J. M. *Linera en Las sentencia básicas del tribunal europeo de derechos humanos*. Thomson Civitas, 2007.
<http://personal.us.es/juanbonilla/contenido/CM/TRIBUNAL%20EUROPEO%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS/JURISPRUDENCIA%20TEDH/SENTENCIAS%20BASICAS%20DEL%20TEDH.pdf>.
- Sozzo, Máximo. “¿Qué es el populismo Penal?”. Revista Urvio No. 11. (2012): 120.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/3974/RFLACSO-11-U11-Gomez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Veintimilla, Jaime y Vallacis, Gabriela. “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Informe Ecuador”, en *Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú*. Washington: Due Process of Law Foundation, 2013.
- Zavala Baquerizo, Jorge citado en Johana Estefanía Campaña Jarrín. “Incidencia jurídico penal del procedimiento abreviado en la legislación ecuatoriana”. Tesis previa a la obtención del título de abogado, Universidad Central del Ecuador, 2014. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3910/1/T-UCE-0013-Ab-257.pdf>.

Anexo 1

Proyectos de Ley Reformatoria al COIP presentados ante la Asamblea Nacional

Ecuador - 2018

o	Fecha	Nombre proyecto	Autor	Sector	Temas	Corriente a la que responde	Estado actual del trámite	Incide en el tema de procedimiento abreviado
1	1/12/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal	Curichumbi Yupanqui Pedro	Creo	Eliminar de las Contravenciones de tránsito, el llevar personas en los baldes de las camionetas	Garantista	En Trámite	No
	03/12/2018	Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal	Larreategui Fabara María Gabriela	Suma	* Ampliar los verbos rectores del daño a bien ajeno * Ampliar los verbos rectores del delito de ataque o resistencia	Punitivista	En Trámite	Si, al ampliar el ámbito de aplicación de los delitos, cierra la puerta a la razón y se busca aumentar las tasas de encarcelamiento, con nefastos efectos en el ámbito social, una ola creciente de populismo penal apunta al castigo sin perder tiempo ni dinero

	29/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal	Peñañiel Izquierdo Eddy Colon	Pachakutik	* Eliminar la pena privativa de la libertad en contravenciones de tránsito constantes en los artículo 383, 386 del COIP * Reforma de contravenciones de tránsito	Garantista	En Trámite	No
	29/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal	Brenda Azucena Flor Gil	Alianza País	* Incremento de la pena en delito de abuso sexual si la víctima es menor de seis años * Incremento de pena en los delito de violación con muerte * Ampliar los verbos rectores de Incendios forestales	Punitivista	En Trámite	Si, por las demandas de penalidad de varios grupos sociales, entre ellos feministas se busca la sanción en delitos sexuales
	29/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal	Carrión Moreno César Ataulfo	Creo	* Propone se aplique el máximo de la pena cuando se venda sustancias estupefacientes en centros educativos	Punitivista	En Trámite	Si, se fomenta una cultura de castigo

	28/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal	Alarcón Guillín Fredy Oscar	Sociedad Patriótica	<p>* Propone se aplique el máximo de la pena cuando se venda sustancias estupefacientes en centros educativos</p> <p>* Se establece requisitos para que no sea punible la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes</p>	Punitivista	En Trámite	Si, se fomenta una cultura de castigo
	22/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal	Cuesta Santana Esther Adelina	Alianza País (Europa, Asia y Oceanía)	<p>* En casos de conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes o estado de embriaguez, se propone se aplique la pena privativa de libertad y la multa; sin reducción de puntos, ni retención del vehículo</p> <p>* Eliminar pena privativa de libertad en contravenciones de tránsito y reducir multas de las mismas (art. 386 COIP)</p> <p>* Reducir el valor de la multa y los puntos que se disminuyen en contravenciones de tránsito (Art. 386-391)</p>	Garantista	En Trámite	No

	22/11/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal	Villalva Miranda Lira de la Paz	Alianza País	* Se amplía ámbito de aplicación del delito de agiotaje	Punitivista	En Trámite	Si, al ampliar el ámbito de aplicación del delito
9	14/11/2018	Proyecto de Ley Reformatoria al Código Integral Penal	Juan Carlos Yar Araujo, Fafo Holguín Gavilánez Camacho	Alianza País	* Reforma y disminución de pena del Art. 265	Garantista	En Trámite	No
10	31/10/2018	Proyecto de Ley Reformatoria al Artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal	Cerda Miranda Gabriela Pamela	Alianza País	* Introduce como sujeto activos del delito de prevaricato a los funcionarios públicos (Art. 269)	Punitivista	En Trámite	Si, al ampliar el ámbito de aplicación del delito

11	17/05/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal - COIP	Doumet Chedraui Michel Andrés	Alianza País	<ul style="list-style-type: none"> * En caso de conducir en estado de embriaguez la pena privativa de libertad no podrá sustituirse * Se modifica niveles de alcohol para quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez * Se incluyen nuevas contravenciones de tránsito 	Punitivista	En Trámite	No, ya que las contravenciones no admiten la aplicación del procedimiento abreviado
12	11/01/2018	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP)	Jeannine del Cisne Cruz Vaca	Creo	<ul style="list-style-type: none"> * Se incluye causas de inculpabilidad (error de tipo) * Error de tipo * En contravenciones de tránsito se sugiere que se elimine la pena privativa de la libertad en la contravención más grave y mantener la multa y pérdida de puntos; en otros casos eliminar la multa y que únicamente se reduzca puntos 	Garantista	En Trámite	No

13	21/11/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal-COIP	Poma Herrera Yofre Martín	Alianza País	<ul style="list-style-type: none"> * Incrementar delitos que sean considerados imprescriptibles (delitos sexuales contra niños/as) * Se amplía las circunstancias agravantes en delitos sexuales * Disminución de multa en delitos con pena privativa de libertad superior a 22 años * El delito de violación existe cuando se da el acceso carnal con persona menor a 18 años 		En Trámite	Si, al ampliar el ámbito de aplicación de los delitos, se apunta al castigo en un universo mayor al cambiar la edad en el tipo penal de violación, pues se refiere a que existe acceso carnal con persona menor a 18 años sin tomar en cuenta si existe o no consentimiento de la presunta víctima
----	------------	--	---------------------------	--------------	--	--	------------	--

14	31/10/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Coip con el Objeto de Tipificar los Delitos y Contravenciones en Contra de la Flora y Fauna	Yunda Machado Jorge Homero, Palacios Muñoz Juan Sebastián, Bustamante Monteros Ruben Alejandro, Zambrano Valle Eduardo Mauricio, Cuesta Concari María Mercedes, Yar Araujo Juan Carlos, Paredes Torres Washington Arturo	Alianza País	* Se amplía ámbito de aplicación de los delitos y contravenciones contra la flora y la fauna silvestre * Se incluye nuevas figuras penales como el abandono y maltrato de animales	Punitivista	En Trámite	Si, al ampliar aún más el catálogo de delitos, si bien la flora y fauna merece atención especial de todos los ciudadanos para su conservación, se debería iniciar con educación antes de imponer sanciones penales que no ayudan a erradicar el problema
----	------------	--	--	--------------	---	-------------	------------	--

15	24/10/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, Coip, para Eliminar la Tabla de Consumo de Drogas	Cástulo Rene Yandún Pozo	Independiente	* Se proponer eliminar la tabla de consumo de drogas y rehabilitar de manera integral a la persona adicta	Punitivista	En Trámite	Se propone rehabilitar a la persona adicta sin embargo al eliminar dicha tabla también se quita la posibilidad que si la sustancia sujeta a fiscalización es para uso personal deje de ser punible
16	14/09/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (Coip)	Moreno guerrero Henry Fredy	Creo Suma –	* Incrementar pena de peculado * Informe de contraloría no sería requisito de procedibilidad en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito * Incremento de penas en delitos contra la eficiente administración pública	Punitivista	En Trámite	Si, ya que se incrementan las penas y el estado promete a la ciudadanía un castigo oportuno y ágil

17	06/09/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, Coip	Duchi Guamán María Encarnación, Peñafiel Izquierdo Eddy Colon	Pachakutik	* Se reconoce más derechos a las personas privadas de libertad * Delitos como ataque y resistencia y asociación ilícita no serán aplicables en los casos movilización y lucha social	Garantista	En Trámite	No, ya que amplia gama de derechos de las persona privadas de libertad y no criminaliza la movilización y lucha social como sucedió en el caso de análisis del presente trabajo
18	15/08/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, Coip	Cástulo Rene Yandún Pozo	Independiente	* Se establece cantidades específicas de los hidrocarburos para que se configure el delito Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles	Punitivista	En Trámite	Sí, ya que se incrementa el ámbito de aplicación del tipo penal
19	18/07/2017	Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal-COIP	Verónica Margarita Guevara Villacres	Alianza País	* Incremento de la pena en : Abigeato Receptación Contravención de Hurto Contravención de Abigeato	Punitivista	En Trámite	Sí, ya que el estado promete a la ciudadanía un castigo oportuno y ágil, proyecto que se encuentra en primer debate

20	17/07/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP	María Encarnación Duchi Guamán	Pachakutik	Informe previo sobre indicios de responsabilidades no es necesario en Peculado y enriquecimiento ilícito	Punitivista	En Trámite	Si, en el caso de enriquecimiento ilícito
21	06/06/2017	Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal-COIP	Veronica Margarita Guevara Villacres	Alianza País	* Incremento de la pena en : Abigeato Receptación Contravención de Hurto Contravención de Abigeato	Punitivista	En Trámite	Si, ya que el estado promete a la ciudadanía un castigo oportuno y ágil, proyecto presentado y no se verifica acciones en el mismo
22	26/01/2017	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, Ley contra la Impunidad	Raúl Vicente Auquilla Ortega	Creo	Eliminar informe previo sobre indicios de responsabilidades como presupuesto de procedibilidad en los delitos Peculado y enriquecimiento ilícito	Punitivista	En Trámite	Si, en el caso de enriquecimiento ilícito
23	30/08/2016	Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria	Cristina Eugenia Reyes Hidalgo	Partido Social Cristiano	*Peculado * Informe especial de contraloría * Procedibilidad	Punitivista	Unificado	No, ya que el tipo penal no admite la aplicación del procedimiento abreviado

		ia al Código Orgánico Integral Penal-Coip						
24	14/07/2014	Proyecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal	Rafael Correa Delgado	Alianza País	* Delitos contra la propiedad intelectual	Punitivista	Publicado	Si, al ampliar aún más el catálogo de delitos con el afán de reducir la impunidad
25	13/10/2011	Proyecto de Ley del Código Orgánico Integral Penal	Rafael Correa Delgado	Alianza País	* Se incrementan penas en algunos delitos * Se introducen nuevos tipos penales * Se establecen procedimientos especialísimos	Punitivista, populismo penal	Publicado	Si, la sensación de inseguridad en el país ha incidido en que se aumente las penas, se tipifique nuevos delitos y se establezcan procedimientos especiales que han sido muy cuestionados Fuente: https://leyes.asambleanacional.gob.ec/